

**DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN LAS ISLAS BALEARES (pp. 1-
25)**

DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A LES ILLES BALEARS (pp. 26-48)

JOSÉ MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ

Assessor jurídic del Servei d'Ordenació del Territori

Departament de Territori i Infraestructures

Consell Insular de Mallorca

Sumario: 1. Introducción. 2. Actividad legislativa. 2.1. Aprobación de los decretos-ley 1/2016 y 2/2016. A. Principales consecuencias del Decreto-Ley sobre la Ley del Suelo (LOUS). B. Principales consecuencias del Decreto-Ley sobre la Ley del Suelo Rústico (LSR), las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) y la Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible. C. Efectos sobre el Plan Territorial Insular de Menorca. D. Efectos sobre la protección de los ANEI. E. Principales efectos del Decreto-Ley sobre la legislación turística. F. Principales efectos del Decreto-Ley sobre la legislación agraria. 2.2. Inicio del proceso de revisión de la Ley 2/2014 (LOUS). 2.3. Aprobación de la Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible. 2.4. Previsiones legislativas y avance de proyectos de ley. A. Nueva ley autonómica de evaluaciones ambientales. B. Anteproyecto de Ley de declaración del Parque Natural d'Es Trenc-Salobrar de Campos (Mallorca). 3. Políticas de recursos marinos. 3.1. Creación de la Reserva Marina del Freu de Sa Dragonera. 3.2. Aprobación del Decreto 22/2016, de 22 de abril, por el que se regulan las medidas para la diversificación de los sectores pesquero y acuícola en las Illes Balears. 3.3. Coordinación de las políticas de pesca entre Ibiza y Formentera 4. Políticas energéticas. 4.1. Eliminación de la tasa de autoconsumo a las renovables y otras medidas. 4.2. Otras medidas para potenciar las energías limpias y de impulso al vehículo eléctrico. 5. Otras políticas ambientales. 5.1. Aprobación de un plan de sequía. 5.2. Revisión de la política de carreteras en Menorca. 5.3. Política de residuos y depuración de aguas en Ibiza. 5.4. Aprobación de una norma territorial cautelar en Mallorca sobre equipamientos comerciales.

1. Introducción

Como ya explicamos en el número de diciembre del 2015, el escenario político en las Islas Baleares vive una situación inédita. La composición del Parlament tiene mayoría de diputados de partidos de izquierdas y la derecha forma oposición sin tener la clave de la gobernabilidad; debemos recordar que los dos precedentes de gobiernos de izquierdas en las Islas Baleares se articularon alrededor de pactos de centro-izquierda, lo que condicionó de manera sustancial la implantación de políticas ambientales de carácter progresista destinadas a revisar el modelo de sostenibilidad ambiental y territorial del archipiélago. El cambio de escenario, por el contrario, se está traduciendo en la revisión de los viejos paradigmas y en el análisis serio de políticas que apuestan por un nuevo modelo territorial, por una mayor justicia social y laboral, y por una mejora de los planteamientos de las políticas ambientales y energéticas. Con todo, como veremos, los primeros pasos dados parecen apresurados y solo representan un camino de buenas intenciones con resultados desiguales y, en algún caso, no demasiado afortunados. De todas formas, será necesario adquirir una mayor perspectiva temporal para realizar una valoración más rigurosa.

En primer lugar, lo que podemos avanzar es que la revisión del modelo de crecimiento puede implicar algunas modificaciones en los planes territoriales insulares y también la revisión de planes directores sectoriales. Los mandatos legales derivados de la legislatura anterior —algunos de ellos ya fueron analizados al detalle en estas páginas— implican, entre otros documentos: la elaboración de un nuevo plan director sectorial de

equipamientos comerciales para cada una de las islas, que fue derogado sin régimen transitorio ni provisional, lo que implicó la existencia de un vacío en la ordenación y distribución territorial del comercio, situación que, con la adaptación a la Directiva 2006/123/CE (DSMI), deja un estrecho margen de acción planificadora, que se limita a los supuestos de razones imperiosas de interés general (RIIG).

Igualmente, y en segundo lugar, la nueva normativa surgida también obliga a elaborar una serie de planes insulares turísticos bajo la denominación de Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), que son considerados por la ley turística como planes directores sectoriales según la denominación adoptada por la legislación autonómica en materia de ordenación territorial.

En tercer lugar, ahora por razones de oportunidad o por el hecho de que se haya superado el período de vigencia, algunas islas están revisando la planificación de residuos, la planificación de actividades extractivas o la planificación energética e hidrológica a nivel del archipiélago. Este grupo constituye un importante paquete de medidas de ordenación territorial de marcado carácter ambiental: residuos, aguas, minería y energía.

Finalmente, algunas islas empiezan a plantearse nuevas políticas de paisaje, así como la ordenación y uso de los caminos destinados al senderismo o el cicloturismo, todo esto desde una perspectiva ambiental íntimamente ligada a la actividad turística. De hecho, la movilidad pasará a ser una cuestión capital en un año turístico que podría batir récords, en el que se esperan más visitantes que ningún otro año en la historia y una enorme afluencia de vehículos, especialmente coches de alquiler llegados expresamente para satisfacer la demanda prevista. En cuanto al aeropuerto de Palma, ya se ha anunciado que tendrá más días punta con franjas horarias que operarán al límite de la capacidad.

Relacionado con este punto, la afluencia masiva de visitantes marcará un debate público inevitable, la necesidad de revisar las políticas de desestacionalización del sector, que no están dando los resultados esperados, puesto que alargan la temporada turística sin repartir la presión de manera racional. Las dinámicas están conduciendo a un incremento global, pero no a un reparto más homogéneo de la presión. Probablemente en algunas islas se puedan plantear problemas en días punta en relación con el suministro de agua o con el tratamiento de las aguas residuales. Otro problema es el de la percepción negativa de una actividad que genera la mayor parte del PIB de las Islas,

percepción que se está traduciendo en un malestar manifestado desde diferentes ámbitos. Es evidente que habrá que aplicar mucha racionalidad en todos los procesos que se han apuntado a lo largo de esta introducción y que se deberán reconducir algunas estructuras del modelo productivo y ambiental del archipiélago.

2. Actividad legislativa

2.1. Aprobación de los decretos-ley 1/2016 y 2/2016

El 12 de enero de 2016 fue aprobado un decreto-ley de medidas urgentes en materia urbanística que dejó sin efecto algunos de los aspectos de las leyes del suelo, turística y agraria que promovían el desarrollo más desordenado y asistemático de la historia reciente de la Comunidad Autónoma —dichas leyes sectoriales habían introducido numerosos preceptos urbanísticos que habían provocado serias distorsiones—. Igualmente, como continuación, y en parte para corregir algunos errores, el día 22 de enero se aprobaba el Decreto-Ley 2/2016, relativo a medidas urgentes en materia urbanística, motivo por el cual nos referiremos a su texto consolidado. Esta propuesta normativa adopta una singular técnica de suspensión de artículos de las normativas sectoriales (Ley Agraria y Ley Turística) y territoriales (LOUS) de la anterior legislatura, que constituyen un conjunto normativo que ha permitido implantar amnistías para los infractores y ha favorecido intereses de determinados sectores económicos y de particulares al margen de la tradición urbanística y territorial y de los procedimientos clásicos que operan en un marco sistemático, con carácter de función pública irrenunciable, y que están destinados a garantizar la defensa del interés general en el marco constitucional previsto.

Según pudimos leer en el documento del pacto de gobernabilidad adoptado para apoyar al ejecutivo, se plantean como objetivos: el impulso de un modelo turístico más sostenible y la mejora de la competitividad del mundo rural. En cualquier caso, es necesario que estos objetivos se desarrollos con coherencia y proporcionalidad, diseñando normativas que se ajusten a los marcos legales urbanísticos y territoriales desde una perspectiva jurídico-pública y que respeten los procedimientos que garantizan la salvaguarda del interés general.

El Decreto-Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística¹, se fundamenta en el propósito de garantizar una mayor seguridad jurídica, pero la técnica utilizada no parece que logre netamente este propósito. De entrada, se suspenden los artículos que ponen más en riesgo estos principios de interés general y de preservación del carácter propio del mundo rural para evitar la tramitación de más expedientes al amparo de unas normas que se tienen que analizar y reformar en profundidad. Por este motivo, el Decreto-Ley tiene un efecto de moratoria a la espera de acometer una revisión en profundidad del marco normativo afectado. Según esta técnica suspensiva o de moratoria, el Decreto-Ley entra en vigor de manera inmediata —al día siguiente de su publicación en el *Boletín Oficial de las Islas Baleares*, es decir, rige desde el día 14 de enero—, pero deja en suspenso hasta diciembre del 2017, total, parcialmente o con modificaciones, cerca de medio centenar de artículos, disposiciones o apartados de la Ley del Suelo, de la Ley del Suelo Rústico, de la Ley de Turismo, de la Ley Agraria, de la normativa que levantó la prohibición de construir en las áreas naturales de especial interés (ANEI) de Ibiza y Formentera, y de la normativa que dejó sin efecto el Plan Territorial de Menorca (mediante una norma territorial transitoria). Es evidente que las medidas apuntadas se dirigen a recuperar el grado de protección ambiental y territorial que se había logrado a lo largo de las últimas décadas con mucho esfuerzo y lentitud.

A. Principales consecuencias del Decreto-Ley sobre la Ley del Suelo (LOUS)

Como ya hemos avanzado, estos dos decretos-ley dejan sin efecto la llamada amnistía para las construcciones ilegales en suelo rústico aprobada la pasada legislatura mediante la adopción de la controvertida disposición transitoria décima de la LOUS, bajo el título “Procedimiento extraordinario de incorporación a la ordenación de edificaciones existentes en el suelo rústico”. Con la suspensión adoptada parece que se consigue el efecto de impedir la legalización de más construcciones ilegales en suelo rústico simplemente pagando una “multa” —lo que la doctrina había bautizado como “tasa del perdón”—, hecho que constituía una auténtica medida discriminatoria con un “efecto llamada” a la indisciplina urbanística y que suponía el descrédito del sistema de control de la legalidad, algo muy preocupante en un Estado democrático de derecho cuya

¹ Véase el texto no consolidado del Decreto-Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística: <<http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10434/574962/decreto-ley-1-2016-de12-de-enero-de-medidas-urgent>>, que se ha visto modificado por el Decreto-Ley 2/2016.

trascendencia no fue evaluada correctamente por el legislador.

Por otro lado, el Decreto-Ley suspende la posibilidad de incluir automáticamente como suelo urbano los llamados asentamientos rurales —núcleos urbanizados irregularmente, algunos de ellos del todo ilegales—, que, a pesar de su denominación, no encajan con el concepto definido en el artículo 21.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que habla claramente de “núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural”; la norma volvía a recompensar la comisión de ilegalidades y a asumir las situaciones de hecho como una forma de adquirir derechos en contra de las leyes.

Los decretos-ley también dejan sin efecto la previsión legal que permitía la inclusión como urbanos de aquellos suelos que fueron protegidos en la legislatura 2007-2011 y que después quedaron desprotegidos —sobre la base del argumento de evitar así el hecho de no tener que pagar futuras indemnizaciones—. Igualmente, se elimina la posibilidad de que los suelos mencionados, que se podían clasificar directamente como urbanos, no computen como crecimiento a los efectos de las previsiones de ordenación territorial de las Directrices de Ordenación del Territorio y de los planes territoriales insulares.

B. Principales consecuencias del Decreto-Ley sobre la Ley del Suelo Rústico (LSR), las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) y la Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible

Los efectos suspensivos de los decretos-ley implican la imposibilidad de beneficiarse del hecho de que determinadas viviendas unifamiliares en suelo rústico construidas y que no habían agotado en su momento el potencial edificable se puedan ampliar hoy incluso por encima de los porcentajes de ocupación y edificabilidad que establece la Ley del Suelo Rústico (hasta un máximo de 450 metros cuadrados). Se vuelve, con respecto al régimen mencionado, a la vigencia de los porcentajes de superficie máxima edificable en suelo rústico, que no podrá superar el 3% en Mallorca y Menorca y el 4% en Ibiza y Formentera.

C. Efectos sobre el Plan Territorial Insular de Menorca

Los dos decretos-ley aprobados también dejan sin efecto la normativa que suspendió la aplicación del Plan Territorial Insular de Menorca, lo que permite recuperar la matriz de usos en suelo rústico de las Directrices de Ordenación del Territorio aplicable en esta isla.

D. Efectos sobre la protección de los ANEI

Otro efecto importante con relación a los suelos especialmente protegidos es que ya no se podrán edificar viviendas en los ANEI de Ibiza y de Formentera. Con la normativa suspendida, hasta ahora se podía construir en ANEI si se disponía de un mínimo de 50.000 metros cuadrados en Ibiza y de una superficie mínima de 30.000 metros cuadrados en Formentera. Esta medida también será de aplicación a los proyectos presentados en los últimos tres meses. Igualmente, se garantiza que las protecciones que se prevén en suelo rústico tengan un carácter de nivel de protección mínimo y que los instrumentos de planeamiento y ordenación territorial las puedan incrementar.

E. Principales efectos del Decreto-Ley sobre la legislación turística

Una importante modificación de los decretos-ley en materia de legislación turística permite reconducir la situación de discrecionalidad, permisividad, dispensas subjetivas y arbitrariedad que había incluido la legislación aprobada en 2012. Los cambios introducidos buscan la racionalización de las actuaciones en los establecimientos hoteleros e intentan evitar la discriminación positiva y privilegiada del sector. Las mejoras en los establecimientos hoteleros o turísticos destinadas a incrementar la competitividad del sector se podrán efectuar en coherencia con la normativa urbanística y la fisonomía y naturaleza del suelo rústico, pero sin dispensas arbitrarias que planteaban una regulación en paralelo a la legislación urbanística común con privilegios exclusivos para las edificaciones hoteleras².

² Entre otras muchas previsiones, y según se desprende de la memoria justificativa del Decreto-Ley 1/2016, se deja sin efecto la permisividad en los volúmenes máximos edificables en los establecimientos turísticos en suelo rústico, de forma que se autorizan reformas y ampliaciones, siempre que se ajusten a los parámetros establecidos en los instrumentos de ordenación territorial y en la normativa aplicable. Igualmente, se cierra expresamente la posibilidad de ubicar en suelo rústico nuevos campos de golf u otros grandes equipamientos deportivos, recreativos, culturales y de cualquier otro uso, con alojamiento turístico asociado. Estos grandes equipamientos, sin alojamiento turístico asociado, se tendrán que someter a la normativa territorial general. También se retoma la obligatoriedad general de la declaración de interés general y de la evaluación de impacto ambiental para la ampliación o la creación de

F. Principales efectos del Decreto-Ley sobre la legislación agraria

La propuesta busca impulsar la competitividad del mundo rural para abrir la posibilidad de nuevas actividades y la mejora de las infraestructuras, pero sin pervertir la idea del suelo agrícola como reserva estratégica, por lo que también se promueven la preservación de su naturaleza y los usos que le son propios. Con esta idea se intenta que el campo no quede invadido por actividades impropias, como permitía la norma en vigor. Se trata de recuperar así el suelo rústico para las actividades agrarias. En este sentido, se continuará imponiendo la obligación de la declaración de interés general para las actividades que no son propias del suelo rústico. Por otro lado, el concepto de agroturismo pasa a ser más restrictivo, se adopta el que se define en la Ley turística. Se mantiene como actividad complementaria de una explotación agraria, pero se regulará mediante la Ley de Turismo; de este modo, se acaba con la doble normativa, con declaración de interés general. Los edificios que se destinan a dichas actividades complementarias deberán estar ubicados en edificaciones construidas antes del 1 de

establecimientos hoteleros en suelo rústico, especialmente en el protegido (de acuerdo con lo que determina la normativa urbanística general). Por otro lado, la Administración turística no podrá aprobar el cambio de uso de un establecimiento turístico a residencial o a otro tipo. Los cambios de uso quedan sometidos, por lo tanto, a las posibilidades que establezcan los planeamientos municipales y las normativas urbanísticas. Igualmente, se suspende la posibilidad de autorizar proyectos “de autor” al margen de las exigencias normativas urbanísticas y turísticas vigentes, simplemente por el prestigio o reconocimiento del arquitecto, ingeniero o artista, por la conveniencia notoria del proyecto, como establecía la Ley general turística. También se elimina la posibilidad de ubicar establecimientos turísticos a todos los efectos en edificios catalogados o protegidos (por ejemplo, faros) o militares si no lo prevé la normativa urbanística, territorial o de patrimonio. Finalmente, los decretos-ley limitan el alcance de la disposición que se refiere a las ampliaciones extraordinarias de los establecimientos hoteleros —la disposición adicional cuarta de la Ley de Turismo—, que fijaba un incremento de la edificabilidad y de la ocupación de parcelas por encima del que permiten los parámetros de ordenación territorial y urbanística. Se reducen las posibilidades y se imponen condiciones: 1. En las ampliaciones de establecimientos hoteleros, los incrementos de superficie edificada y de ocupación no podrán superar nunca el 20%. Queda eliminada la posibilidad que permitía la Ley general turística de llegar al 40% para establecimientos de categorías no inferiores a cinco estrellas o en casos de proyectos singulares; 2. Las ampliaciones (máximo 20% en hoteles y 10% en otros establecimientos turísticos) únicamente serán posibles sobre la edificación legal. Se elimina la posibilidad de la anterior norma de ampliar sobre aquello ilegal; 3. En cuanto a la posibilidad de ampliar establecimientos agregando la edificabilidad de otras parcelas, se elimina la posibilidad de hacerlo transfiriendo la edificabilidad de parcelas no adyacentes. Se mantiene la posibilidad de ampliar hoteles sumando la edificabilidad de parcelas adyacentes con la condición de que la parcela que se suma en ningún caso esté calificada como espacio libre, equipamiento público o suelo rústico; 4. Se impide el aumento del número de plantas: la altura no podrá exceder de la existente o permitida (excepto para equipamientos de ascensores, escaleras de emergencia, climatización, telecomunicaciones, eficiencia energética y homogeneización de elementos en las cubiertas). Se elimina la posibilidad de aumentar dos alturas en las zonas hoteleras maduras; 5. Para el ámbito de la playa de Palma, se adoptan medidas para hacer coherente la reciente aplicación del Plan de Reconversión Integral (PRI) con las posibilidades otorgadas por la disposición adicional cuarta; 6. Se elimina la posibilidad de que el Consell de Govern pueda prorrogar el plazo de vigencia de esta disposición que regula las ampliaciones excepcionales de establecimientos turísticos (que vence en julio de 2017); y 7. Por seguridad jurídica, se incluye una disposición transitoria que establece que las modificaciones de la disposición adicional cuarta no afectarán a los proyectos que ya han iniciado su tramitación ante la Administración turística.

enero de 1960 y situadas en una finca rústica de una superficie mínima de 21.000 m².

Otras medidas serían: limitar las exoneraciones de la exigencia de parcela mínima y dejarlas únicamente para explotaciones agrarias prioritarias, infraestructuras de regadío o invernaderos; dejar sin efecto la posibilidad de segregar en suelo rústico por debajo de la unidad mínima de cultivo; considerar las actividades ecuestres como actividad complementaria de la explotación agraria siempre que no tengan carácter comercial, de restauración o de espectáculo; y, finalmente, mantener la posibilidad de nuevas actividades como, por ejemplo, la venta directa de productos de una explotación, si bien limitando la superficie de venta, que pasa de los 150 m² previstos en la normativa agraria aprobada en 2014 a un máximo de 75 m².

2.2. Inicio del proceso de revisión de la Ley 2/2014 (LOUS)

Uno de los retos de esta legislatura será recomponer el consenso en materia de legislación de los sistemas territoriales. De momento se ha comenzado por abordar la revisión de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, mediante un total de ocho mesas técnicas, integradas por más de cincuenta representantes de entidades, instituciones y colegios profesionales, cada una de las cuales analizará un determinado aspecto de la Ley del Suelo para debatir y plantear las propuestas de reforma.

Hay que recordar que la LOUS, durante su tramitación parlamentaria, solo obtuvo el apoyo unánime en un 20% del articulado; el resto contó únicamente con el apoyo de la mayoría que configuraba el gobierno autonómico en la legislatura 2011-2015. Este es uno de los motivos que aconsejan cambiar la metodología participativa para revisar la legislación urbanística del archipiélago. Así, se han configurado distintas mesas técnicas, cada una de ellas centrada en la temática de uno de los títulos de la actual norma del suelo —así como de otras normativas autonómicas—, para ir avanzando paralelamente en las propuestas y formar una opinión cualificada y abierta a la sociedad. Entre estos técnicos independientes se pueden encontrar abogados, ingenieros, arquitectos, aparejadores, geógrafos, medioambientalistas, ecologistas, constructores, promotores, entre otros agentes y operadores económicos y sociales. Igualmente, a estos técnicos se añaden los representantes de las administraciones públicas —Comunidad Autónoma, consejos insulares y ayuntamientos— y los de las entidades vinculadas a las

temáticas tratadas —como colegios profesionales, asociaciones empresariales de promotores y constructores, entidades ecologistas, la Universidad de las Illes Balears, la Cámara de Comercio o la ABTU (Agrupación Balear de Técnicos Urbanistas), entre otras—.

Las mesas constituidas trabajan sobre las materias siguientes: principios generales y competencias; régimen de suelo urbano y urbanizable (clasificación, derechos y deberes); planeamiento urbanístico, política de suelo, garantías de propiedad y patrimonio público de suelo; régimen de suelo rústico; gestión urbanística y ejecución del planeamiento; edificación y uso del suelo; y, finalmente, disciplina urbanística.

El procedimiento escogido para abordar la reforma de la Ley del Suelo, según se ha hecho público por los responsables del Govern, quiere ser una garantía de pluralidad y consenso, puesto que se ha optado por un planteamiento innovador en el que los técnicos son quienes, en las distintas mesas, darán forma a la propuesta normativa. La previsión es que aproximadamente para marzo de 2017 las mesas tengan preparada una propuesta técnica para presentarla a los distintos grupos políticos y al conjunto de la sociedad, con un plazo de exposición pública para la presentación de alegaciones, y entonces iniciar su tramitación parlamentaria.

2.3. Aprobación de la Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible

El *Boletín Oficial de las Islas Baleares* (BOIB) publicaba el 2 de abril la Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible³. Los dos grandes objetivos de este impuesto son: por una parte, compensar la huella ecológica de la actividad turística, y, por otra, ayudar a cambiar el modelo para que esta actividad sea sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social. Con este nuevo tributo, los visitantes contribuirán a preservar el medio insular.

El Govern defendió en sede parlamentaria que el impuesto era necesario para dar respuesta a una demanda social de la mayoría ciudadana, ya manifestada en anteriores legislaturas, y porque es uno de los instrumentos que permitirá, a la larga, mejorar la

³ Véase: <<http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10470/578257/ley-2-2016-de-30-de-marzo-del-impuesto-sobre-estan>>.

competitividad del archipiélago poniendo el énfasis en la calidad y en la sostenibilidad del sector y de las Islas, en contra del modelo masificado imperante.

Con esta ley se establece un nuevo tributo, el impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears, que tiene un carácter básicamente finalista, puesto que los ingresos que se recaudan se destinarán a gastos e inversiones vinculados, en esencia, al desarrollo y la protección medioambiental, y al turismo sostenible. A tal efecto, se crea el fondo para favorecer el turismo sostenible —que se tiene que nutrir de la recaudación de este nuevo tributo—, y, dado que el desarrollo sostenible requiere la colaboración y la participación de la sociedad, se crea también la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible, órgano en que deben participar las administraciones públicas y los agentes económicos y sociales.

De conformidad con el texto normativo, y como podemos leer en la exposición de motivos, la intención es que el impuesto se destine a compensar a la sociedad balear por el coste medioambiental que supone el ejercicio de determinadas actividades que distorsionan o deterioran el medio ambiente en el territorio de las Islas Baleares (compensación de externalidades negativas). La mejora de la competitividad del sector turístico a través de un turismo sostenible, responsable y de calidad en el archipiélago es otro de los objetivos de la nueva Ley. Así, el hecho imponible lo constituye la estancia que realice el contribuyente en los denominados establecimientos turísticos, esto es, los establecimientos hoteleros y otros establecimientos típicos de alojamiento, las viviendas turísticas y las embarcaciones de crucero turístico.

Por otro lado, se debe destacar el hecho de que, como ya pasa con la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles, la legislación tributaria no puede ignorar la circunstancia de que las estancias se sustancian en viviendas que no cumplen todos los requisitos que impone la legislación turística. Así pues, en estos casos son procedentes el devengo, la liquidación y el cobro del impuesto, y, además, la imposición de una sanción administrativa por no cumplir plenamente los requisitos que establece la legislación turística para el ejercicio de la actividad.

Finalmente, la Ley prevé la figura de los sujetos pasivos y crea la figura del sustituto, junto a la del contribuyente —que es quien lleva a cabo el hecho imponible—. El sustituto es quien debe cumplir las obligaciones materiales y formales que dispone la Ley. Además, y con objeto de garantizar el cobro de la deuda tributaria, se establecen determinados supuestos de responsabilidad solidaria. En cuanto a la cuota tributaria, se

configura una tarifa que oscila entre 0,25 euros y 2 euros por día de estancia o fracción, en función de los tipos de establecimientos en los que tiene lugar el hecho imponible. No obstante, esta cuota tributaria es objeto de una bonificación del 50% para las estancias que se realicen en temporada baja. Asimismo, se establece otra bonificación, también del 50%, sobre la cuota íntegra aplicable a las estancias de los contribuyentes en un mismo establecimiento turístico que se extiendan más allá de ocho días consecutivos.

La Ley aprobada consta de veinte artículos —distribuidos en cuatro títulos—, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

2.4. Previsiones legislativas y avance de proyectos de ley

A. Nueva ley autonómica de evaluaciones ambientales

Con casi dos años de retraso, se ha iniciado por fin en las Islas Baleares el cambio de normativa que deberá cumplir cualquier proyecto que afecte al medio ambiente. Esta propuesta legislativa viene motivada por la obligación de adaptarse a la legislación estatal, modificada en 2014. Ese año el Gobierno español dio un plazo de doce meses a las comunidades autónomas para acogerse al nuevo texto o bien actualizar la normativa que hubieran aprobado en su día.

El Govern de les Illes Balears ha iniciado así el procedimiento para abordar el cambio legislativo desde el principio inspirador de la transparencia y la participación, con la consideración de que la información pública no es solo un trámite sino un aspecto esencial. El texto, publicado en el *Boletín Oficial de las Islas Baleares* (BOIB), regulará qué proyectos se deberán someter obligatoriamente a la evaluación ambiental y será más restrictivo que la normativa estatal, si bien al mismo tiempo dará más agilidad administrativa para resolver estos asuntos con mayor rapidez, aunque siempre con garantías. Asimismo, da más peso a la figura del auditor ambiental, poniendo el acento en la fase de vigilancia ambiental y estableciendo el seguimiento de los proyectos. Igualmente, la nueva propuesta aumenta los supuestos en que los proyectos se deberán someter a evaluación ambiental.

El borrador de la nueva Ley de Evaluación de Impacto Ambiental ha superado ya el

período de consulta a las administraciones y a los órganos afectados y se encuentra en trámite parlamentario. Según el calendario que ha difundido el Govern, la normativa podría estar aprobada en los próximos meses. Como hemos apuntado, el Proyecto de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de las Illes Balears que ahora se tramita aumenta los supuestos en que los proyectos deberán someterse al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares para poder ser autorizados. Si bien la Ley 14/2006 —modificada en numerosas ocasiones— permitía que determinados proyectos solo se sometieran a la evaluación de impacto ambiental cuando el órgano ambiental así lo decidiera, el nuevo texto elimina este supuesto.

De este modo, el Govern incrementará el número de casos y proyectos que deberán ser sometidos a evaluación ambiental y, de estos, los que tendrán que pasar por la vía ordinaria, la más restrictiva y complicada de superar. Así se desprende de la redacción del proyecto en trámite parlamentario. El Proyecto de Ley reduce los casos de arbitrariedad que permitían a la Administración decidir si una iniciativa debía o no ser sometida a dicho trámite, y fija ahora mediante una serie de anexos una gran cantidad de criterios que harán obligatoria la revisión ambiental de un proyecto.

Concretamente, el anexo III recoge los criterios por los que un proyecto tendrá que someterse por fuerza a evaluación ambiental. El primero son las características del proyecto, que tendrán que considerarse, en particular, desde el punto de vista de las dimensiones, la acumulación con otros proyectos, la utilización de recursos naturales, la generación de residuos, la contaminación que generen y otros inconvenientes, además del riesgo de accidentes.

La ubicación del proyecto también será determinante en este caso; la sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad en relación con el uso existente del suelo, con la abundancia relativa, con la calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área y con las características del impacto potencial. Así, se tendrá en cuenta la capacidad de carga del medio natural y se pondrá especial énfasis en el caso de que los proyectos se sitúen en humedales, zonas costeras, reservas naturales y parques, zonas protegidas, áreas de gran densidad demográfica, paisajes con significación histórica o cultural y áreas con potencial afectación al patrimonio cultural.

Se da el caso que, con este redactado, proyectos como el del gran centro comercial de

Ses Fontanelles en Palma (en una zona que había ocupado un importante humedal) tendrían que haber pasado por evaluación de impacto ambiental, mientras que, por el contrario, no lo hicieron. Solo la reclasificación urbanística —mediante el Plan Parcial— se sometió a la Comisión de Medio Ambiente, pero no el proyecto de centro comercial, puesto que los promotores lo presentaron fraccionado para eludir este trámite.

En cuanto a la planificación territorial y urbanística y a los planes o programas sectoriales, el borrador añade también los criterios por los que la evaluación ambiental estratégica deberá someterse a la tramitación ordinaria y no a la simplificada. Los problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa, la medida en que influye en otros planes, el carácter acumulativo de los efectos o los riesgos para el medio ambiente son algunos de los criterios apuntados.

Igualmente, el Proyecto de Ley incorpora también el principio de transparencia y profundiza en la utilización de los medios electrónicos como forma habitual de comunicación para facilitar la participación, la transparencia y el acceso a la información.

B. Anteproyecto de Ley de declaración del Parque Natural de Es Trenc-Salobrar de Campos (Mallorca)

Desde hace décadas una parte de la ciudadanía, amparada por diversas organizaciones sociales, ha venido reivindicando la conservación de la zona de Es Trenc-Salobrar de Campos (en el sur de Mallorca), reivindicación que se ha convertido en una de las aspiraciones con mayor trayectoria en la historia de la conservación de las Islas. Así, son muchas las voces que han venido reclamando durante más de treinta años la declaración como parque natural de este lugar privilegiado. De hecho, con el grito de “Salvem es Trenc” podríamos afirmar que el 21 de mayo de 1978 se iniciaba la lucha por la preservación de este espacio emblemático de Mallorca, cuando unas 500 personas se manifestaron en la playa de Es Trenc en contra de la construcción de un restaurante y por el mantenimiento de su carácter virgen.

Varios años después, el 30 de septiembre de 1983, tuvo lugar una gran manifestación para la protección de Es Trenc-Salobrar a la que asistieron más de 10.000 personas (un número significativo para la época) y que tuvo continuidad con una campaña liderada

por el Grup Balear d'Ornitologia (GOB), que ha seguido durante décadas. En respuesta a las aspiraciones populares encabezadas principalmente por la mencionada organización ecologista, en 1984 el Parlament de les Illes Balears declaró Es Trenc-Salobrar de Campos como área natural de especial interés (ANEI).

Posteriormente, la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección (LEN), consolida la zona de Es Trenc-Salobrar como ANEI. Esta protección implicaba la garantía que impedía cualquier proceso de urbanización, a pesar de que no garantizaba una gestión efectiva ni una ordenación eficaz. La LEN disponía que esta zona debía dotarse de una figura de protección y conservación. En este sentido se elaboró, tramitó y aprobó el Plan Especial del ANEI de Es Trenc-Salobrar de Campos, documento que en su día fue capital pero que ha quedado superado por la numerosa normativa sobrevenida, que lo ha dejado casi inaplicable.

En cuanto a las aspiraciones del cumplimiento de la LEN, cabe recordar que el 22 de julio de 1999 el presidente Francesc Antich, en su discurso de investidura, dijo lo siguiente: “Quiero hacer mención especial al capítulo de espacios naturales: se declarará un parque natural en la sierra de Tramuntana y también se declararán la Albufereta de Pollença y Es Trenc-Salobrar de Campos, todos ellos en Mallorca”. Pese a ello, quince años después esto no se ha hecho realidad y ni se ha declarado parque natural ni el Plan Especial se ha aplicado de manera efectiva. Esta circunstancia ha provocado que, desde 1991, la afluencia incontrolada y la carencia de medidas de conservación hayan dado lugar a un continuo proceso de degradación de la zona. El incumplimiento histórico de las previsiones de la LEN, que establecía que el Govern promovería una declaración de espacio natural protegido para Es Trenc-Salobrar de Campos, se tiene que corregir.

La calidad e importancia de esta zona se basan en la presencia de hábitats del anexo I y taxones del anexo II de la Directiva 92/43/CE por la existencia de especies y subespecies endémicas. Dado su elevado interés ornitológico, este espacio ha sido considerado como IBA (área de especial importancia para las aves) por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y justifica su declaración como ZEPA además de como LIC.

A pesar de ello, el espacio no ha estado exento de amenazas y presiones urbanísticas. A las edificaciones ilegales de Ses Covetes se añade el hecho de que en 2003, mediante la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, se modificaron las DOT para permitir la

construcción de una clínica (una clínica-hotel, en realidad) en los baños de Sant Joan de sa Font Santa, un proyecto residencial que se situaría justo junto a la zona húmeda de Es Salobrar.

Por otro lado, el Plan Territorial Insular de Mallorca (PTIM) preveía dos operaciones de reconversión territorial en el municipio de Campos que fueron eliminadas con la modificación número 2 del Plan. Estas operaciones de reconversión permitían crear en el municipio (ámbito de Sa Ràpita) nuevas zonas hoteleras y residenciales, lo que hubiera supuesto implantar nuevamente 5.000 plazas turísticas y residenciales muy cerca del área natural a proteger.

Por otro lado, y en relación con los intentos más recientes de declarar el lugar como parque natural, el 9 de junio de 2006, por Acuerdo del Consell de Govern, se inició el procedimiento de elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) en el ámbito de la zona de Es Trenc-Salobrar de Campos. El sector incluye espacios que forman parte del lugar de interés comunitario (LIC) y de la zona de especial protección para las aves (ZEPA) de Es Trenc-Salobrar de Campos y que también se incluyen dentro del área marina, como LIC, del archipiélago de Cabrera, adscritos a la red Natura 2000.

Con la iniciación del procedimiento de elaboración del PORN se anunció la intención de otorgar a la zona una protección parecida a la de s'Albufera, sin especificar cuál sería la figura de protección. El Acuerdo del Govern habló de una superficie de 1.442 hectáreas terrestres (coincidente, por lo tanto, con el actual ANEI) y 2.338 hectáreas marinas. Dos años después, en 2008, el Govern de la CAIB acordó una prórroga de un año para la elaboración de este PORN, hecho que se volvió a repetir un año más en 2009, de forma que se llegó al 9 de junio de 2010, fecha en que finalizaba el plazo para aprobar el Plan. Cabe añadir aquí que el inicio de la tramitación del PORN no ha incluido ninguna medida cautelar, cosa que hubiera permitido proteger de manera efectiva el lugar y hubiera evitado que continuara el proceso de degradación mientras se elabora el PORN.

Es evidente que la protección de Es Trenc-Salobrar de Campos mediante la figura del parque natural es la que ofrece las garantías de protección y de gestión efectiva que merece la zona. Igualmente, la protección y el ámbito de gestión no se tienen que ajustar necesariamente a los límites del actual ANEI, sea cual sea el perímetro de la zona declarada espacio natural. Un espacio natural necesita además un entorno de protección

sin agresiones territoriales donde se garantice una transición armónica entre las zonas de más alto valor y las periferias.

Con todos estos antecedentes, por fin se ha iniciado el trámite para crear mediante ley el Parque Natural de Es Trenc-Salobrar de Campos, propuesta legislativa cuyo período de consultas y participación ciudadana (iniciado el 29 de marzo de 2016) ya ha finalizado y que será una realidad el próximo curso parlamentario, pasado el verano. Cuando se apruebe, procederemos a analizar la norma con más detalle.

3. Políticas de recursos marinos

3.1. Creación de la Reserva Marina del Freu de Sa Dragonera

Una de las políticas que ya disfruta de una tradición normativa importante en el archipiélago es la creación de reservas marinas, tanto en aguas interiores, declaradas por el Govern de la CAIB, como en aguas exteriores, declaradas por el Gobierno del Estado. Ahora es el turno de la Reserva Marina del Freu de Sa Dragonera, promovida por el gobierno autonómico, que regulará las extracciones de flora y fauna y las actividades subacuáticas en esta zona del poniente de Mallorca. Esta será la octava reserva marina del archipiélago y contará con 708 hectáreas, que se suman a las 58.000 ya existentes. Así, se ha iniciado el procedimiento de elaboración de un decreto por el que se establecerá la mencionada reserva marina, que presenta un valor ecológico y pesquero considerable, donde se pueden encontrar, en un área relativamente reducida, una diversidad muy alta de hábitats y comunidades, tal como recoge el estudio elaborado en 2004 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a propuesta de la consejería responsable de pesca del Govern de la CAIB.

Las reservas marinas son áreas donde se limita la explotación de los recursos marinos vivos para incrementar la repoblación de alevines y fomentar la proliferación de las especies marinas objeto de explotación o proteger los ecosistemas con características diferenciadas. En los paisajes submarinos de Sa Dragonera destacan las praderas de *Posidonia oceanica*, muy extendidas hacia el sur, que actúan como zonas de elevada producción biológica y de cría de especies de interés pesquero. Esto conlleva que el área merezca un alto grado de protección. Asimismo, la zona incluye parte del lugar de importancia comunitaria (LIC) de Sa Dragonera y forma parte del entorno marino del Parque Natural.

Dado que varios informes del Servicio de Recursos Marinos ponen de manifiesto que las poblaciones de peces vulnerables se encuentran muy por debajo de su número potencial, es necesario regular las actividades pesqueras para asegurar su mantenimiento de una manera compatible con la conservación de la riqueza biológica y de los recursos marinos vivos. Entre otras medidas, se delimitarán las zonas especiales para el buceo recreativo a fin de facilitar un desarrollo sostenible y armónico con el resto de actividades.

Se cumplen así las peticiones de varios colectivos sociales e instituciones públicas, como el Ayuntamiento de Andratx o el Parlament de les Illes Balears, que han pedido la declaración de una reserva marina en la isla, y se actúa de acuerdo con la consideración de *hope spot* o punto para la esperanza del mar Balear, declarado por el proyecto Mission Blue. El objetivo de la iniciativa es generar el apoyo de la sociedad para proteger estos lugares mediante la creación de una red mundial de áreas marinas protegidas que salvaguarden el 20% de los océanos para el año 2020, siendo el mar Balear el único punto con esta consideración en el Mediterráneo.

Desde 1999 el Govern ha establecido una red de reservas marinas en las aguas interiores del litoral balear que ha demostrado ser una herramienta de gestión importante para recuperar las poblaciones de peces comerciales y conservar los hábitats naturales marinos. Este tipo de reservas se han consolidado como un importante referente para la actividad económica del buceo turístico, con más de 25.000 inmersiones anuales. Por eso, actualmente el archipiélago dispone de siete reservas marinas, con una superficie total de 58.000 hectáreas, que son un elemento básico de gestión pesquera del Govern.

3.2. Aprobación del Decreto 22/2016, de 22 de abril, por el que se regulan las medidas para la diversificación de los sectores pesquero y acuícola en las Illes Balears

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca presentó el conocido como “Decreto Pesca-Turismo”. Nos referimos al Decreto 22/2016, de 22 de abril, por el que se regulan las medidas para la diversificación de los sectores pesquero y acuícola en las Illes Balears, aprobado por el Govern de les Illes Balears, que intenta implantar medidas de diversificación de la actividad pesquera añadiendo posibles vías de complemento de rentas. Con esta medida, se prevé que los pescadores obtengan unos ingresos adicionales llevando turistas a bordo mientras realizan la actividad pesquera, lo que,

según se afirma en la exposición de motivos, resulta totalmente compatible y no perjudicará su trabajo diario. Esta nueva fuente de ingresos mejorará las condiciones laborales de la gente del mar, pues se reducirán las horas de pesca y también se evitará que pongan su vida en riesgo cuando salen a faenar con mal tiempo para asegurarse un salario mínimo, que ahora se podrá compensar mediante el turismo.

La mejora de las condiciones de trabajo y la creación de nuevas posibilidades de negocio abren la puerta a la incorporación de los más jóvenes a un sector muy envejecido y sin relevo generacional hoy en día. En parte, el desplazamiento parcial de la actividad marinera al turismo ayudará a reducir el impacto sobre los recursos pesqueros, puesto que se acorta el tiempo dedicado a la pesca, lo que permitirá recuperar las pesquerías y colaborar con el equilibrio medioambiental.

Por otro lado, la venta directa de las capturas a los turistas que participen en la actividad, siempre en el marco de la legislación vigente, será una fuente de ingresos extra. Esta actividad no supone solo ingresos económicos derivados de la venta de la excursión, puesto que también puede originar beneficios tales como que los turistas puedan comer pescado fresco, o, incluso, la comida típica de marinero a bordo de los barcos, lo que supone además una forma de difusión de la gastronomía. Igualmente, se espera que, con las previsiones relativas a la promoción del pescado balear a nivel turístico, se aporte un valor añadido a los productos frescos del mar, lo que, con el tiempo, podría generar una marca propia y así obtener un mejor precio de venta del pescado.

Según la motivación del Decreto, esta nueva disposición normativa reguladora de las medidas para la diversificación de los sectores pesquero y acuícola en las Islas Baleares no solo pretende poner de relieve el excepcional paisaje de nuestras costas, sino también promocionar una cultura marinera y una gastronomía que corren peligro de desaparecer, además de proporcionar a las cofradías de pescadores, que son corporaciones de derecho público y sin ánimo de lucro, unos ingresos suplementarios que les permitan sufragar las actividades sociales que desarrollan, especialmente las dirigidas a marineros jubilados y a sus familiares. Se busca, pues, una simbiosis entre cultura, economía y medio ambiente.

3.3. Coordinación de las políticas de pesca entre Ibiza y Formentera

Los consejos de Ibiza y de Formentera han acordado poner en común las políticas pesqueras respectivas y, a la vez, pedir al Govern más medios para la gestión efectiva de las reservas marinas con una mejora de la dotación de personal y de material. Las administraciones insulares mencionadas han valorado varias propuestas de acción conjunta sobre el espacio marino que comparten ambas islas, y han puesto en común las políticas en materia de pesca que se están desarrollando tanto desde Ibiza como desde Formentera. Las dos instituciones también solicitarán al Govern el cambio de algunos aspectos de la normativa pesquera para adecuarla a la realidad del sector y han puesto como ejemplo el carácter poco disuasorio, por su poca cuantía, que tienen las multas por pesca ilegal con fines comerciales. También se ha acordado presionar conjuntamente para conseguir una mayor vigilancia en las reservas marinas.

En la misma línea, los consejos de Ibiza y de Formentera también han acordado reclamar que todos aquellos proyectos que puedan afectar a los recursos pesqueros — como la construcción de puertos deportivos, la instalación de emisarios o de cables submarinos— cuenten con un informe valorativo de las respectivas consejerías insulares de Pesca.

Finalmente, cabe señalar que ambos consejos insulares han constatado el descenso registrado de capturas pesqueras, y han valorado la adopción de medidas y análisis sobre dónde establecer nuevos espacios protegidos que no supongan un desplazamiento de la presión pesquera a zonas adyacentes.

4. Políticas energéticas

4.1. *Eliminación de la tasa de autoconsumo a las renovables y otras medidas*

En el marco de una revisión profunda de las políticas energéticas en el archipiélago, el Govern ha promovido diferentes acciones para impulsar el ahorro energético y fomentar el uso de las energías renovables. Una de las primeras medidas adoptadas ha sido eliminar la tasa administrativa para las instalaciones de autoconsumo energético para hogares y pequeños comercios. Así, el Govern ha eliminado la tasa administrativa de hasta casi 70 euros que hasta ahora se tenía que pagar por la puesta en servicio de las instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo de hasta 10 kW. Esta potencia es la que habitualmente suelen tener un hogar particular o incluso un pequeño comercio, que también se podrán beneficiar de la exención.

Igualmente, y también para favorecer las instalaciones de autoconsumo para el año 2016, se ha aumentado la deducción fiscal por inversiones que mejoren la calidad y la sostenibilidad de la vivienda habitual hasta el 15% de la inversión realizada. Además, se está preparando la puesta en marcha de una ventanilla única que permita simplificar los trámites.

En la misma línea, y de una forma coordinada, tanto la Administración de la CAIB como algunas instituciones insulares han procedido a adquirir vehículos eléctricos y a instalar puntos de recarga gratuita para este tipo de medios de transporte. La intención del Govern es fomentar que, progresivamente, a medida que se vaya renovando la flota de coches, cada vez haya más vehículos que funcionan con energía limpia. Esta acción se enmarca en una estrategia global del Govern para impulsar el ahorro energético y la utilización de las energías renovables. Las actuaciones en que se materializará esta estrategia, coordinadas por la Dirección General de Energía y Cambio Climático de la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad, se fundamentan en tres ejes: el ahorro energético, el avance en la electrificación del transporte —en una clara apuesta por la movilidad eléctrica— y la generación de energía renovable y el autoconsumo, tanto en las instalaciones de la misma CAIB como entre los ciudadanos.

Igualmente, existe la intención de implantar otras medidas para beneficiar económicamente a los ciudadanos que opten por instalar sistemas de autoconsumo energético en su hogar o en pequeños comercios, bajo el principio de que todo aquello que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles y contribuya a luchar contra el cambio climático encontrará un lugar en las nuevas políticas energéticas de esta legislatura.

Finalmente, cabe señalar que se está dando un impulso a la implantación de nuevos proyectos de parques fotovoltaicos, a pesar de que sobre esta cuestión se plantea el conflicto de su correcta implantación e integración en el paisaje isleño, especialmente sensible y vulnerable, en función del impacto que presentan las iniciativas que se quieren implantar en zonas agrícolas de valor y con una extensión donde el impacto visual es significativo.

4.2. Otras medidas para potenciar las energías limpias y de impulso al vehículo eléctrico

A las medidas apuntadas en el apartado anterior, hay que añadir otras acciones para fomentar el ahorro energético y el uso de energías renovables. Por una parte, durante el año 2016 se llevará a cabo una diagnosis energética de las instalaciones de todas las consejerías del Govern para determinar el potencial máximo de ahorro energético. Esta diagnosis ayudará a estructurar el plan de ahorro que se activará. Igualmente, por otra, en el primer semestre de 2016 se sacará a concurso un nuevo contrato de suministro energético a la CAIB, un suministro que deberá ser exclusivamente con energías renovables. La idea es que, cuando se resuelva el concurso, las instalaciones dependientes de la CAIB funcionen con energías limpias. El ahorro que se espera conseguir tanto con el plan de ahorro como con el nuevo contrato de suministro y con la progresiva instalación de sistemas de autoconsumo se reinvertirá en medidas como el fondo de rescate energético que se anunció recientemente en la Mesa de Lucha contra la Pobreza Energética y que, inicialmente, estará dotado con 200.000 euros.

Otras actuaciones de ahorro energético van dirigidas a adoptar un modelo de movilidad sostenible, con la potenciación de un servicio de transporte público de calidad y la utilización de energías limpias para su funcionamiento —como se pretende con la electrificación de toda la red ferroviaria—. Para avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible, hay que reducir también la dependencia del coche y favorecer el uso de vehículos eléctricos. Así, paralelamente, se impulsará el uso del vehículo eléctrico mediante un conjunto de medidas; de hecho, en pocos meses se han triplicado los puntos de recarga en las Islas, que han pasado de 45 a cerca de 150, y a la vez se trabaja en la creación de una red única de recarga.

Por otro lado, el Govern ha reservado un total de 800.000 euros en ayudas a las instituciones públicas. De este dinero, 500.000 euros se destinarán a subvencionar la instalación de placas solares en las azoteas de los edificios públicos y 300.000 euros, para los municipios que instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos.

En cuanto a las placas solares, el Govern subvencionará hasta un 80% de la instalación. Respecto a los puntos de carga para vehículos eléctricos, la subvención del Govern será de un 100%, con un máximo de cinco puntos de carga por municipio. En este caso, para conceder la ayuda el Govern valorará que el ayuntamiento haya incorporado en las ordenanzas medidas efectivas para favorecer el vehículo eléctrico como el aparcamiento gratuito para estos vehículos en zonas azules, los descuentos en el uso de aparcamientos subterráneos municipales o el descuento en los tributos municipales de circulación.

5. Otras políticas ambientales

5.1. Aprobación de un plan de sequía

Ante la escasa pluviometría de los últimos meses, las Islas Baleares se encuentran en estado de alerta por la falta de este recurso. Con el fin de minimizar el impacto de esta reducción drástica de las reservas de agua, se ha acordado elaborar un plan de sequía, un instrumento legal necesario con el que no se cuenta en la actualidad porque no fue incluido en el Plan Hidrológico aprobado en la legislatura anterior. Por eso, se pondrán en marcha de manera inmediata acciones concretas para incrementar el recurso del agua, básicamente mediante desalinizadoras. En la de Palma se incrementarán las líneas de producción; la de Andratx se conectará a través de las redes municipales; y se dotará de más potencia a la de Alcúdia. Y en Ibiza se llevarán a cabo una serie de acciones para conectar la desalinizadora de Santa Eulària, que el Govern recibirá dentro de unas semanas.

Estas acciones se complementarán con la gestión de la demanda mediante campañas de concienciación ciudadana sobre la realidad de las reservas de agua como bien escaso en el archipiélago. En este sentido, en caso de restricciones se apoyará a los ayuntamientos para que redacten ordenanzas que prioricen los usos admitidos. En la misma línea, se apoyará a los núcleos de población con más de 20.000 habitantes para que elaboren un plan de emergencia frente a la sequía.

El Govern difundió el mensaje de que había que realizar un esfuerzo mental de cambio de paradigma y situar las desalinizadoras como base del sistema para complementarlo con los recursos naturales que hemos ahorrado durante el verano, y no a la inversa, como se ha hecho hasta ahora, teniendo en cuenta que Mallorca se encuentra en prealerta por sequía e Ibiza ya lo está.

5.2. Revisión de la política de carreteras en Menorca

El Servicio de Carreteras del Consell Insular de Menorca ha concluido la revisión del proyecto de mejora de la Me-1 del tramo Ferreries-Ciutadella. Con esta revisión se han incorporado las propuestas que se presentaron al público a principios del pasado mes de marzo en Ferreries y en Ciutadella. Con esta iniciativa se completa la revisión del

anterior proyecto de reforma de la carretera general, que generó un enorme rechazo social por desproporcionado e irracional.

La revisión de este proyecto, en concreto, incorpora la reducción de una serie de tramos, de enlaces, de rotundas y de pasos desdoblados, con una mejor redistribución de los carriles y la minimización del impacto y las ocupaciones sobre los terrenos afectados.

El presupuesto del proyecto revisado es de 9.250.000 euros. Así, se ha reducido el presupuesto de obra del proyecto original en 750.000 euros para incluir dentro de los 10 millones destinados a este tramo las asistencias técnicas de redacción de proyectos y de dirección de las obras. Por otro lado, como se ha dicho, la revisión del proyecto ha permitido reducir la ocupación del territorio en 37.500 m² respecto del proyecto constructivo aprobado por el anterior equipo de gobierno, lo cual representa un 23%.

5.3. Política de residuos y depuración de aguas en Ibiza

El Pleno del Consell ha acordado la aprobación inicial del proyecto para construir una planta de separación para tratar los lodos de las depuradoras, con la modificación inicial del contrato entre el Consell y la UTE GIREF sobre el funcionamiento y la explotación de instalaciones de tratamiento integral de residuos. Esta modificación comporta la construcción, por parte de la UTE GIREF, de una planta de separación en el vertedero de Can na Putxa. Esta planta separará los lodos que no hayan sido separados previamente e incorporará dos líneas de compostaje. Una de estas líneas de compostaje tratará los lodos provenientes de las depuradoras.

Una vez votada la aprobación inicial, se abre un período de alegaciones y, en un plazo máximo de tres meses, el Pleno del Consell deberá votar la aprobación definitiva. Se prevé que las obras se inicien a finales de año.

5.4. Aprobación de una norma territorial cautelar en Mallorca sobre equipamientos comerciales

Después de una tramitación en que tuvieron lugar diferentes encuentros con representantes del sector del comercio, de entidades de defensa de los consumidores, de los sindicatos, del Govern de les Illes Balears y del Ayuntamiento de Palma, se aprobó la versión definitiva de la Norma Territorial Cautelar (NTC) para así seguir trabajando

en el inicio de la redacción del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales. La NTC, principalmente, suspende la implantación y la ampliación de grandes establecimientos, excepto en algunos casos regulados.

Después de haber pasado el período de alegaciones, se incorporaron algunas modificaciones para mejorarla. En general, se ha simplificado su contenido para que sea más sencilla. En este sentido, solo se regulan los casos en suelo urbano puesto que actualmente solo es posible construir equipamientos comerciales en este tipo de suelo.

Durante el proceso se analizaron una veintena de alegaciones y se intentó dar respuesta a todo el mundo. Sobre todo se atendieron las que provenían del mundo del comercio para poder mejorar la redacción de la norma. Las dimensiones de los espacios que se consideraban gran equipamiento comercial no han variado. Por lo tanto, los grandes establecimientos comerciales siguen siendo aquellos que tengan una superficie útil para la exposición y la venta superior a 700 metros cuadrados. En algunos casos, como los establecimientos de material de construcción o de automóviles, pueden llegar a los 2.000 metros cuadrados.

Sin embargo, la implantación y la ampliación de establecimientos comerciales individuales ubicados en grandes centros comerciales colectivos, siempre y cuando no incrementen la superficie edificada ni invadan espacios comunes, se han excluido de la suspensión. Por otro lado, también se excluye la ampliación de grandes establecimientos comerciales individuales hasta un máximo del 15% o de 200 metros cuadrados, aunque ello no puede suponer que se amplíe la edificabilidad ni tampoco un cambio de actividad.

La Norma Territorial Cautelar fue aprobada definitivamente en el Pleno del Consell de Mallorca de día 11 de febrero de 2016. Entró en vigor a partir de su publicación en el BOIB número 28, de 1 de marzo de 2016 (pp. 5760 a 5763)⁴.

La aprobación y la entrada en vigor de la norma se fundamentan en razones imperiosas de interés general (RIIG), en conformidad con el marco de la legislación de liberalización del mercado interior y sobre la base de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio. No obstante, una patronal del sector interpuso la reclamación prevista en el artículo 26 de la Ley 20/2013,

⁴ Véase: <http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10456/576976/acord-del-ple-del-consell-insular-de-mallorca-d-ap?idEnviament=576976&mode=view&numero=10456>

de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), y en estos momentos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya ha presentado ante la institución insular el requerimiento previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), lo que implicará, con toda seguridad, que la norma acabe siendo discutida ante los tribunales.

Sumari: 1. Introducció. 2. Activitat legislativa. 2.1. Aprovació dels decrets llei 1/2016 i 2/2016. 2.2. Inici del procés de revisió de la Llei 2/2014 (LOUS). 2.3. Aprovació de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible. 2.4. Previsions legislatives i avanç de projectes de llei. 3. Polítiques de recursos marins. 3.1. Creació de la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera. 3.2. Aprovació del Decret 22/2016, de 22 d'abril, pel qual es regulen les mesures per a la diversificació dels sectors pesquer i aquícola a les Illes Balears. 3.3. Coordinació de les polítiques de pesca entre Eivissa i Formentera 4. Polítiques energètiques. 4.1. Eliminació de la taxa d'autoconsum a les renovables. 4.2. Altres mesures per potenciar les energies netes i d'impuls al vehicle elèctric. 5. Altres polítiques ambientals. 5.1. Aprovació d'un pla de sequera. 5.2. Revisió de la política de carreteres a Menorca. 5.3. Política de residus i depuració d'aigües a Eivissa. 5.4. Aprovació d'una norma territorial cautelar a Mallorca sobre equipaments comercials.

1. Introducció

Com ja varem explicar al número de desembre del 2015, l'escenari polític a les Illes Balears viu una situació inèdita. La composició del parlament té majoria de diputats de partits d'esquerres i la dreta forma oposició sense tenir la clau de la governabilitat; hem de recordar que els dos precedents de governs d'esquerres a les Illes Balears es varen articular al voltant de pactes de centreesquerra, la qual cosa va condicionar de manera substancial la implantació de polítiques ambientals de caràcter progressista destinades a revisar el model de sostenibilitat ambiental i territorial de l'arxipèlag. El canvi d'escenari, per contra, s'està traduint en la revisió dels vells paradigmes i en l'anàlisi seriosa de polítiques que aposten per un nou model territorial, per una justícia social i laboral més gran, i per una millora dels plantejaments de les polítiques ambientals i energètiques. Amb tot, com veurem, els primers passos fets semblen precipitats i només representen un camí de bones intencions amb resultats desiguals i, en algun cas, no gaire afortunats. De totes formes, cal adquirir més perspectiva temporal per dur a terme una valoració més rigorosa.

En primer lloc, el que podem avançar és que la revisió del model de creixement pot implicar algunes modificacions en els plans territorials insulars i també la revisió de plans directors sectorials. Els mandats legals derivats de la legislatura anterior —alguns dels quals ja es varen analitzar al detall en aquestes pàgines— impliquen, entre d'altres, l'elaboració d'un nou pla director sectorial d'equipaments comercials per a cadascuna de les illes, que va ser derogat sense règim transitori ni provisional, la qual cosa va implicar l'existència d'un buit en l'ordenació i distribució territorial del comerç, situació que, amb l'adaptació a la Directiva 2006/123/CE (DSMI), deixa un marge estret d'acció planificadora que es limita als supòsits de raons imperioses d'interès general (RIIG).

Igualment, i en segon lloc, la nova normativa que ha sorgit, també obliga a elaborar una sèrie de plans insulars turístics sota la denominació de Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT), que són considerats per la llei turística com a plans directors sectorials segons la denominació adoptada per la legislació autonòmica pel que fa a ordenació territorial.

En tercer lloc, ara per raons d’oportunitat o pel fet que s’ha superat el període de vigència, algunes illes revisen la planificació de residus, d’activitats extractives, o la planificació energètica i hidrològica en l’àmbit de l’arxipèlag. Aquest grup conforma un important paquet de mesures d’ordenació territorial de marcat caràcter ambiental: residus, aigües, mineria i energia.

Finalment, algunes illes comencen a plantejar-se noves polítiques de paisatge així com l’ordenació i ús dels camins destinats al senderisme o el cicloturisme, tot això des d’una perspectiva ambiental íntimament lligada a l’activitat turística. De fet, la mobilitat passarà a ser una qüestió cabdal en un any turístic que podria ser de rècord, en què s’esperen més visitants que cap altre any en la història i una enorme afluència de vehicles, especialment cotxes de lloguer arribats expressament per satisfer la demanda prevista. Ja s’ha anunciat que, pel que fa a l’aeroport de Palma, tindrà més dies punta amb franges horàries que operaran al límit de la capacitat. Relacionat amb aquest punt, la massiva afluència de visitants marcarà un debat públic inevitable, la necessitat de revisar les polítiques de *desestacionalització* del sector que no donen els resultats esperats, ja que allarguen la temporada turística sense repartir la pressió de manera racional. Les dinàmiques condueixen a un increment global, però no a un repartiment més homogeni de la pressió. Probablement en algunes illes es podran plantejar problemes en dies punta amb el subministrament d'aigua o amb el tractament correlatiu de les aigües residuals. Un altre problema és de percepció negativa d’una activitat que genera la major part del PIB de les Illes, percepció que s’està traduint en un malestar que es manifesta des de diferents àmbits. És evident que caldrà aplicar molta racionalitat en tots els processos que s’han apuntat al llarg d’aquesta introducció i que hauran de reconduir algunes estructures del model productiu i ambiental de l’arxipèlag.

2. Activitat legislativa

2.1. Aprovació dels decrets llei 1/2016 i 2/2016

El 12 de gener de 2016 va ser aprovat un decret llei de mesures urgents en matèria urbanística, que deixà sense efecte alguns dels aspectes de les lleis del sòl, turística i agrària que més promovien el desenvolupament desordenat i asistemàtic de la història recent de la comunitat autònoma, on un seguit de lleis sectorials introduïren nombrosos preceptes urbanístics i provocaren serioses distorsions. Igualment, com a continuació, i en part per corregir algunes errades, el dia 22 de gener es va aprovar el Decret llei 2/2016, per aquest motiu ens referirem al text consolidat del Decret llei de mesures urgents en matèria urbanística. Aquesta proposta normativa adopta una singular tècnica de suspensió d'articles de les normatives sectorials (llei agrària i llei turística) i territorials (LOUS) de l'anterior legislatura, que conformen un conjunt normatiu que ha permès implantar amnisties per als infractors i han afavorit interessos de determinats sectors econòmics i de particulars al marge de la tradició urbanística i territorial i dels procediments clàssics que operen en un marc sistemàtic, amb caràcter de funció pública irrenunciable i que estan destinats a garantir la defensa de l'interès general en el marc constitucional previst.

Segons vàrem poder llegir al pacte de governabilitat adoptat per donar suport a l'executiu, al document es planteja com a objectius: l'impuls d'un model turístic més sostenible i la millora de la competitivitat del món rural. En qualsevol cas, aquests objectius cal que es duguin a terme amb coherència i proporcionalitat, dissenyant normatives que s'ajustin als marcs legals urbanístics i territorials des d'una perspectiva juridicopública i que respectin els procediments que garanteixen la salvaguarda de l'interès general.

El Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística⁵, es motiva en el propòsit de garantir més seguretat jurídica, però la tècnica utilitzada no sembla que assoleixi netament aquest propòsit. D'entrada, se suspenen els articles que posen més en risc aquests principis d'interès general i de preservació del caràcter propi del món rural, per evitar la tramitació de més expedients a l'empara d'unes normes que s'han d'analitzar i reformar en profunditat. Per aquest motiu, el Decret llei té un efecte

⁵ Vegeu el text no consolidat del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística:
<http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS088944ZI202368&id=202368>.

de moratòria a l'espera d'escometre una revisió en profunditat del marc normatiu afectat. Segons aquesta tècnica suspensiva o de moratòria, el Decret llei entra en vigor de manera immediata —l'endemà de la publicació al *Butlletí Oficial de les Illes Balears*, és a dir, regeix des del dia 14 de gener— però deixa en suspens fins a desembre del 2017 totalment, parcialment o amb modificacions, prop de mig centenar d'articles, disposicions o apartats de la llei del sòl, de la llei de sòl rústic, de la llei de turisme, de la llei agrària o de la normativa que va aixecar la prohibició de construir a les àrees naturals d'especial interès (ANEI) d'Eivissa i Formentera, o la que deixà sense efecte el Pla Territorial de Menorca (mitjançant una norma territorial transitòria). És evident que les mesures apuntades es dirigeixen a recuperar el grau de protecció ambiental i territorial que s'havia assolit al llarg de les darreres dècades amb molt esforç i lentitud.

A. Principals conseqüències del Decret llei sobre la llei del sòl (LOUS)

Com ja hem avançat, aquests dos decrets llei deixen sense efecte l'anomenada amnistia per a les construccions il·legals en sòl rústic aprovada la passada legislatura amb l'adopció de la controvertida disposició transitòria desena de la LOUS i amb el nom de “Procediment extraordinari d'incorporació a l'ordenació d'edificacions existents en el sòl rústic”. Amb la suspensió adoptada sembla que s'aconsegueix l'efecte d'impedir la legalització de més construccions il·legals en sòl rústic simplement pagant una “multa” o el que la doctrina ha batejat com a “taxa del perdó”, fet que constitua una autèntica mesura discriminatòria amb un efecte crida a la indisciplina urbanística i al descrèdit del sistema de control de la legalitat, un fet molt preocupant en un estat democràtic de dret, la transcendència del qual no va ser prou avaluat pel legislador.

D'altra banda, el Decret llei suspèn la possibilitat d'incloure automàticament com a sòl urbà els anomenats assentaments rurals —nuclis urbanitzats irregularment, i alguns dels quals del tot il·legals— que, tot i la denominació, no encaixen amb el concepte definit en l'article 21.4 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei del sòl i rehabilitació urbana, que parla clarament de “nuclis rurals tradicionals legalment assentats en el medi rural”; la norma tornava a recompensar la comissió d'il·legalitats i a assumir les situacions de fet com una forma d'adquirir drets en contra de les lleis.

Els decrets llei també deixen sense efecte la previsió legal que permetia la inclusió com a urbans dels sòls que foren protegits en la legislatura 2007-2011 i que després quedaren desprotegits —motivat en l'argument d'evitar així el fet de no haver de pagar futures indemnitzacions—. Igualment, s'elimina la possibilitat que els sòls esmentats, que es podien classificar directament en urbans, no computin com a creixement als efectes de les previsions d'ordenació territorial de les Directrius d'ordenació del territori i dels plans territorials insulars.

B. Principals conseqüències del Decret llei sobre la llei de sòl rústic (LSR), les Directrius d'ordenació del territori (DOT) i la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible

Els efectes suspensius dels decrets llei impliquen la impossibilitat de beneficiar-se del fet que determinats habitatges unifamiliars en sol rústic construïts i que no havien esgotat en el moment oportú el potencial edificable, es puguin ampliar avui fins i tot per sobre dels percentatges d'ocupació i edificabilitat que estableix la llei de sòl rústic (fins a un màxim de 450 metres quadrats). Es retorna, respecte d'això, a la vigència dels percentatges de superfície màxima construïble en rústic, que no pot superar el 3% a Mallorca i Menorca i el 4% a Eivissa i Formentera.

C. Efectes sobre el Pla territorial Insular de Menorca

Els dos decrets llei aprovats també deixen sense efecte la normativa que va suspendre l'aplicació del Pla Territorial Insular de Menorca i permet recuperar la matriu d'usos en el sòl rústic de les Directrius d'ordenació del territori aplicable en aquesta illa.

D. Efectes sobre la protecció dels ANEI

Un altre efecte important amb relació als sòls especialment protegits és que ja no es poden edificar habitatges en els ANEI d'Eivissa i de Formentera. Amb la normativa suspesa, fins ar, es podia construir en ANEI si es disposava d'un mínim de 50.000 metres quadrats a Eivissa i d'una superfície mínima de 30.000 metres quadrats a Formentera. Aquesta mesura és aplicable també als projectes presentats en els darrers tres mesos. Igualment, queda garantit que les proteccions que es preveuen en sòl rústic

tenen un caràcter de nivell de protecció mínim i que els instruments de plantejament i ordenació territorial el poden incrementar.

E. Principals efectes del Decret llei sobre la legislació turística

Una modificació important dels decrets lleis en matèria de legislació turística permet reconduir la situació de discrecionalitat, permissivitat, dispenses subjectives i arbitrarietat que havia inclòs la legislació aprovada el 2012. Els canvis introduïts cerquen la racionalització de les actuacions en els establiments hotelers i intenten evitar la discriminació positiva i privilegiada del sector. Les millores en els establiments hotelers o turístics destinades a incrementar la competitivitat del sector es poden efectuar amb coherència amb la normativa urbanística i la fisonomia i naturalesa del sòl rústic, però sense les dispenses arbitràries que planteaven una regulació en paral·lel a la legislació urbanística comuna amb privilegis exclusius de les edificacions hoteleres⁶.

⁶ Entre moltes altres previsions, i segons es desprèn de la memòria justificativa del Decret llei 1/2016, es deixa sense efecte la permissivitat en els volums màxims construïbles en els establiments turístics en sòl rústic, de manera que s'autoritzen reformes i ampliacions, sempre que s'ajustin als paràmetres establets en els instruments d'ordenació territorial i en la normativa aplicable. Igualment, es tanca expressament la possibilitat d'ubicar en sòl rústic nous camps de golf o altres grans equipaments esportius, recreatius, culturals, i de qualsevol altre ús, amb allotjament turístic associat. Aquests grans equipaments, sense allotjament turístic associat, s'han de sotmetre a la normativa territorial general. També es reprèn l'obligatorietat general de la declaració d'interès general i de l'avaluació d'impacte ambiental per a l'ampliació o la creació d'establiments hotelers en sòl rústic, especialment el protegit (d'acord amb el que determina la normativa urbanística general). D'altra banda, l'Administració turística no pot aprovar el canvi d'ús d'un establiment turístic a residencial o a una altra mena. Els canvis d'ús queden sotmesos, per tant, a les possibilitats que estableixin els planejaments municipals i les normatives urbanístiques. Igualment se suspèn la possibilitat d'autoritzar projectes “d'autor” al marge de les exigències normatives urbanístiques i turístiques vigents, simplement pel prestigi o reconeixement de l'arquitecte, enginyer o artista, per la conveniència notòria del projecte, com establia la Llei general turística. També s'elimina la possibilitat d'ubicar establiments turístics amb caràcter general en edificis catalogats o protegits (per exemple, fars) o militars si no ho preveu la normativa urbanística, territorial o de patrimoni. Finalment, els decrets llei limiten l'abast de la disposició que es refereix a les ampliacions extraordinàries dels establiments hotelers —la disposició addicional quarta de la llei de turisme—, que fixava un increment de l'edificabilitat i de l'ocupació de parcel·les per sobre del que permeten els paràmetres d'ordenació territorial i urbanística. Se'n redueixen les possibilitats i s'hi imposen condicions: 1. En les ampliacions d'establiments hotelers, els increments de superfície edificada i d'ocupació no han de superar mai el 20%. Queda eliminada la possibilitat que permetia la Llei general turística d'arribar al 40% per a establiments de categories no inferiors a cinc estrelles o en casos de projectes singulars; 2. Les ampliacions (màxim 20% hotels i 10% altres establiments turístics) únicament són possibles sobre l'edificació legal. S'elimina la possibilitat de l'anterior norma d'ampliar sobre el que és il·legal; 3. Quant a la possibilitat d'ampliar establiments agregant l'edificabilitat d'altres parcel·les, s'elimina la possibilitat de fer-ho transferint l'edificabilitat de parcel·les no adjacents. Es manté la possibilitat d'ampliar hotels sumant l'edificabilitat de parcel·les adjacents amb la condició que la parcel·la que se suma en cap cas pot estar qualificada com a espai lliure, equipament públic o sòl rústic; 4. S'impedeix l'augment del nombre de plantes: l'alçada no pot excedir de l'existent o permesa (excepte per a equipaments d'ascensors, escales d'emergència, climatització, telecomunicacions, eficiència energètica i homogeneïtzació d'elements a les cobertes). S'elimina la possibilitat d'augmentar dues altures en les zones hoteleres madures; 5. Per a l'àmbit de la platja de Palma, s'adopten mesures per fer coherent la recent aplicació del Pla de Reversió Integral

F. Principals efectes del Decret llei sobre la legislació agrària

La proposta intenta fer compatible la competitivitat del món rural, per obrir la possibilitat de noves activitats i la millora de les infraestructures, però sense pervertir la idea del sòl agrícola com a reserva estratègica, promovent la preservació de la seva naturalesa i els usos que li són propis. Amb aquesta idea s'intenta que el camp no quedi envaït per activitats alienes, com permetia la norma en vigor. Es tracta de recuperar així el sòl rústic per a les activitats agràries. En aquest sentit, es continua imposant l'obligació de la declaració d'interès general per a les activitats que no són pròpies del sòl rústic. D'altra banda, el concepte d'agroturisme passa a ser més restrictiu, s'adulta el que es defineix en la llei turística. Es manté com a activitat complementària d'una explotació agrària però s'ha de regular mitjançant la llei de turisme; d'aquesta manera, s'acaba amb la doble normativa, amb declaració d'interès general. Els edificis que s'hi destinin han d'estar ubicats en edificacions construïdes abans de l'1 de gener de 1960, situades en una finca rústica d'una superfície mínima de 21.000 m².

Altres mesures serien: limitar les exoneracions de l'exigència de parcel·la mínima, i queden únicament per a explotacions agràries prioritàries, infraestructures de regui o als hivernacles; deixar sense efecte la possibilitat de segregar en sòl rústic per sota de la unitat mínima de cultiu; considerar les activitats eqüestres com activitat complementària de l'explotació agrària sempre que no tinguin caràcter comercial, de restauració o d'espectacle; i, finalment, mantenir la possibilitat de noves activitats, com ara a la venda directa de productes d'una explotació, però se'n limita la superfície, ja que passa de 150 m² tal com preveu la normativa agrària aprovada el 2014 a un màxim de 75 m².

2.2. Inici del procés de revisió de la Llei 2/2014 (LOUS)

Un dels reptes d'aquesta legislatura serà recompondre el consens en matèria de legislació dels sistemes territorials. De moment s'ha començat per escometre la revisió de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, mitjançant un total de vuit mesos tècniques, integrades per més de 50 representants d'entitats, institucions i

(PRI) amb les possibilitats atorgades per la disposició addicional quarta; 6. S'elimina la possibilitat que el Consell de Govern pugui prorrogar el termini de vigència d'aquesta disposició que regula les ampliacions excepcionals d'establiments turístics (que venç al mes de juliol del 2017); i 7. Per seguretat jurídica, s'inclou una disposició transitòria, que estableix que les modificacions de la disposició addicional quarta no afectaran els projectes que ja han iniciat la tramitació davant l'Administració turística.

col·legis professionals, que analitzaran a cada una un determinat aspecte de la llei del sòl per debatre i plantejar les propostes de reforma.

Cal recordar que en tràmit parlamentari, la LOUS només va obtenir el suport unànim en un 20% de l'articulat, la resta va comptar únicament amb un suport limitat per la majoria que configurava el Govern autonòmic en la legislatura 2011-2015. Aquest és un dels motius que aconsellen canviar la metodologia participativa per revisar la legislació urbanística de l'arxipèlag. Així, s'han configurat distin tes meses tècniques que se centren, cadascuna, en la temàtica d'un dels títols de l'actual norma del sòl —i de les similars d'altres normatives autonòmiques—, per anar avançant paral·lelament en les propostes i formar una opinió qualificada i oberta a la societat. Entre aquests tècnics independents, es poden trobar advocats, enginyers, arquitectes, aparelladors, geògrafs, mediambientalistes, ecologistes, constructors, promotores, entre altres agents i operadors econòmics i socials. Igualment, a aquests tècnics, s'afegeixen els representants de les administracions públiques —comunitat autònoma, consells insulars i ajuntaments—, i els de les entitats vinculades a les temàtiques tractades —com ara col·legis professionals, associacions empresarials, promotores, constructors, entitats ecologistes, la Universitat de les Illes Balears, la Cambra de Comerç o ABTU (Agrupació Balear de Tècnics Urbanistes), entre d'altres.

Les meses constituïdes treballen sobre les matèries següents: principis generals i competències; règim de sòl urbà i urbanitzable (classificació, drets i deures); planejament urbanístic, política de sòl, garanties de propietat i patrimoni públic de sòl; règim de sòl rústic; gestió urbanística i execució del planejament; edificació i ús del sòl i, finalment, una mesa sobre disciplina urbanística.

El procediment escollit per abordar la reforma de la llei del sòl, segons s'ha fet públic pels responsables del Govern, vol ser una garantia de pluralitat i consens, ja que s'ha optat per un plantejament innovador en què els tècnics són els qui, en les distin tes meses, donaran forma a la proposta normativa. Amb tot, la previsió és que aproximadament al mes de març de 2017 la Mesa tingui preparada una proposta tècnica per presentar-la als diferents grups polítics i al conjunt de la societat, amb un termini d'exposició pública per a la presentació d'al·legacions, i llavors iniciar la tramitació parlamentària.

2.3. Llei 2/2016, de 30 de març, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible

El *Butlletí Oficial de les Illes Balears* (BOIB) va publicar el 2 d'abril la Llei 2/2016, de 30 de març, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible⁷. Els dos grans objectius d'aquest impost són: d'una banda, compensar la petjada ecològica de l'activitat turística, i, de l'altra, ajudar a canviar el model perquè aquesta activitat sigui sostenible des del punt de vista ambiental, econòmic i social. Amb aquest nou tribut, els visitants contribueixen a preservar el medi insular.

El Govern va defensar en seu parlamentària que l'impost era necessari per donar resposta a una demanda social de la majoria ciutadana, que ja s'havia manifestat en anteriors legislatures, i perquè és un dels instruments que, a la llarga, ha de permetre millorar la competitivitat de l'arxipèlag posant l'èmfasi en la qualitat i en la sostenibilitat del sector i de les Illes, en contra del model massificat imperant.

Amb aquesta llei s'estableix un nou tribut, l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears, que té un caràcter bàsicament finalista, mitjançant l'afectació dels ingressos que es recaptin en la realització de despeses i inversions vinculades, en essència, amb el desenvolupament i la protecció mediambiental, i amb el turisme sostenible. A aquest efecte, es crea el fons per afavorir el turisme sostenible —que s'ha de nodrir del producte de la recaptació d'aquest nou tribut— i, tenint en compte que el desenvolupament sostenible requereix la col·laboració i la participació de la societat, es crea també la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible, òrgan en què han de participar les administracions públiques i els agents econòmics i socials.

De conformitat amb el text normatiu, i com podem llegir a l'exposició de motius, la intenció és que l'impost es destini a compensar la societat balear pel cost mediambiental que suposa l'exercici de determinades activitats que distorsionen o deteriorell el medi ambient en el territori de les Illes Balears (compensació d'externalitats negatives). La millora de la competitivitat del sector turístic a través d'un turisme sostenible, responsable i de qualitat a l'arxipèlag és un altre dels objectius de la nova llei. Així, el fet imposable el constitueix l'estada que faci el contribuent en els denominats

⁷ Vegeu: <<http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10470/578257/llei-2-2016-de-30-de-marc-de-l-impost-sobre-estade>>.

establiments turístics, això és, els establiments hotelers i altres establiments típics d'allotjament, els habitatges turístics i les embarcacions de creuer turístic.

D'altra banda, s'ha de destacar el fet que, com ja passa amb la recaptació de l'impost de béns immobles, la legislació tributària no pot ignorar el fet que les estades se substanciïn en habitatges que no compleixin tots els requisits que per a això imposa la legislació turística. Així, doncs, en aquests casos són procedents la meritació, la liquidació i el cobrament de l'impost i, a més, la imposició d'una sanció administrativa per no complir plenament els requisits que estableix la legislació turística per a l'exercici de l'activitat.

Finalment, la llei preveu la figura dels subjectes passius i crea la figura del substitut, juntament amb el contribuent —que és el qui duu a terme el fet imposable—. El substitut és qui ha de complir les obligacions materials i formals que disposa la llei. A més, i a fi de garantir el cobrament del deute tributari, s'estableixen determinats supòsits de responsabilitat solidària. Pel que fa a la quota tributària, es configura una tarifa que oscil·la entre 0,25 euros i 2 euros per dia d'estada o fracció, en funció dels tipus d'establiments en els quals té lloc el fet imposable. Això no obstant, aquesta quota tributària és objecte d'una bonificació del 50% per a les estades que es facin en temporada baixa. Així mateix, s'estableix una altra bonificació, també del 50%, sobre la quota íntegra aplicable a les estades dels contribuents en un mateix establliment turístic que s'estenguin més enllà de vuit dies consecutius.

La llei aprovada consta de vint articles —distribuïts en quatre títols—, dues disposicions addicionals, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

2.4. Previsions legislatives i avanç de projectes de llei

A. Nova llei autonòmica d'avaluacions ambientals

Amb gairebé dos anys de retard, a les Illes Balears a la fi s'ha encetat el canvi de normativa que ha de complir qualsevol projecte que afecti el medi ambient. Aquesta proposta legislativa està motivada per l'obligació d'adaptar-se a la legislació estatal modificada el 2014. Aquell any el Govern espanyol va donar un termini de dotze mesos a les comunitats autònombes per acollir-se al nou text o bé actualitzar la normativa que podien haver aprovat al seu dia les comunitats autònombes.

El Govern de les Illes ha iniciat així el procediment per abordar el canvi legislatiu des del principi inspirador de la transparència i la participació, amb la consideració que la informació pública no és només un tràmit sinó un aspecte essencial. El text, publicat en el *Butlletí Oficial de les Illes Balears* (BOIB), regula quins projectes s'han de sotmetre, obligatòriament, a l'avaluació ambiental i serà més restrictiu que la normativa estatal, però alhora donarà més agilitat administrativa per resoldre aquests assumptes amb més rapidesa, però amb garantia. Així mateix, dóna més pes a la figura de l'auditor ambiental posant l'accent en la fase de vigilància ambiental i fent el seguiment dels projectes. Igualment la nova proposta augmenta els supòsits en què els projectes s'han de sotmetre a avaluació ambiental.

L'esborrany de la nova llei d'avaluació d'impacte ambiental ha superat ja el període de consulta a les administracions i als òrgans afectats i es troba ja en tràmit parlamentari. Segons el calendari que ha difós el Govern, la normativa podria estar aprovada en els pròxims mesos. Com hem apuntat, el projecte de llei d'avaluació d'impacte ambiental de les Illes Balears que ara es tramita, augmenta els supòsits en què els projectes han de sotmetre's al dictamen de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per poder ser autoritzats. Si bé la Llei 14/2006 —modificada en nombroses ocasions—, permetia que determinats projectes només se sotmetessin a l'avaluació d'impacte ambiental quan l'òrgan ambiental així ho decidís, el nou text elimina aquest supòsit.

D'aquesta manera, el Govern incrementarà el nombre de casos i projectes que han de ser sotmesos a l'avaluació ambiental i els que després han de passar per la via ordinària, la més restrictiva i complicada de superar. Així es desprèn de la redacció del projecte en tràmit parlamentari. El projecte de llei redueix els casos d'arbitrarietat que permetien a l'Administració decidir si una iniciativa havia o no de ser sotmesa a aquest tràmit, i fixa ara mitjançant una sèrie d'annexos una gran quantitat de criteris que faran obligatòria la revisió ambiental d'un projecte.

Concretament, l'annex III recull els criteris pels quals un projecte ha de sotmetre's per força a l'avaluació ambiental ordinària. El primer són les característiques del projecte, que han de considerar-se, en particular des del punt de vista de les dimensions, l'acumulació amb altres projectes, la utilització de recursos naturals, la generació de residus, la contaminació que generin i altres inconvenients, a més del risc d'accidents.

La ubicació del projecte també és determinant en aquest cas, la sensibilitat mediambiental de les àrees geogràfiques que puguin veure's afectades pels projectes

haurà de considerar-se tenint en compte els principis de sostenibilitat, a la vista de l'ús existent del sòl, de l'abundància relativa, de qualitat i capacitat regenerativa dels recursos naturals de l'àrea, i de les característiques del potencial impacte. Així, es tindrà en compte la capacitat de càrrega del medi natural i es posa especial èmfasi en el cas que els projectes se situïn en aiguamolls, zones costaneres, reserves naturals i parcs, zones protegides, àrees de gran densitat demogràfica, paisatges amb significació històrica o cultural i àrees amb potencial afecció al patrimoni cultural.

Es dóna el cas que amb aquest redactat, projectes com el del gran centre comercial de les Fontanelles a Palma (en una zona que havia ocupat un important aiguamoll) haurien d'haver passat per l'avaluació d'impacte ambiental i, per contra, no ho feren. Només la reclasificació urbanística —mitjançant el Pla Parcial— se sotmeté a la Comissió Balear de Medi Ambient, però no el projecte de centre comercial, ja que els promotores el presentaren fraccionat per eludir aquest tràmit.

Quant a la planificació territorial i urbanística, i plans o programes sectorials, l'esborrany afageix també els criteris pels quals l'avaluació ambiental estratègica ha de sotmetre's a la tramitació ordinària i no simplificada. Els problemes ambientals significatius relacionats amb el pla o programa, la mesura en què influeix en altres plans, el caràcter acumulatiu dels efectes o els riscos per al medi ambient en són alguns dels criteris apuntats.

Igualment el projecte de llei incorpora també el principi de transparència i aprofundeix en la utilització dels mitjans electrònics com a forma habitual de comunicació, per facilitar la participació, la transparència i l'accés a la informació.

B. Avantprojecte de llei de declaració del parc natural d'Es Trenc-Salobrar de Campos (Mallorca)

Des de fa dècades una part de la ciutadania emparada per organitzacions socials, ha reivindicat la conservació de la zona d'Es Trenc-Salobrar de Campos (al sud de Mallorca), que s'ha convertit en una de les aspiracions de més trajectòria en la història de la conservació de les Illes. Així, són moltes les veus que han reclamat durant més de trenta anys la declaració com a parc natural d'aquest privilegiat indret. De fet, amb el crit de “Salvem es Trenc”, podríem afirmar que el 21 de maig de 1978 va començar la lluita per a la preservació d'aquest espai emblemàtic de Mallorca, quan unes 500

persones es manifestaren a la platja d'Es Trenc en contra de la construcció d'un restaurant i pel manteniment del seu caràcter verge.

Anys després, el 30 de setembre de 1983, tingué lloc una gran manifestació per a la protecció d'Es Trenc-Salobrar, a la qual van assistir més de 10.000 persones (moltes per a l'època) i que va tenir continuïtat amb una campanya liderada pel Grup Ornitològic Balear (GOB), que ha continuat vigent durant dècades. Com a reacció a la mobilització popular, l'any 1984 el Parlament de les Illes Balears, en resposta a les aspiracions populars encapçalades principalment per l'assenyalada organització ecologista, declarà es Trenc-Salobrar de Campos com a àrea natural d'especial interès (ANEI).

Posteriorment, la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i règim urbanístic de les àrees d'especial protecció (LEN), consolida la zona d'Es Trenc-Salobrar com a ANEI. Aquesta protecció implicava la garantia que impedia qualsevol procés d'urbanització, tot i que no en garantia una gestió efectiva ni una ordenació eficaç. La LEN disposava que aquesta zona havia d'ésser dotada d'una figura de protecció i conservació. En aquest sentit es va elaborar, tramitar i aprovar el Pla Especial de l'ANEI d'Es Trenc-Salobrar de Campos, document que el seu dia va ser cabdal però que ha estat superat per la nombrosa normativa sobrevinguda que l'ha deixat gairebé inaplicable.

Pel que fa a les aspiracions en compliment de la LEN, s'ha de recordar que el 22 de juliol de 1999, el president Francesc Antich al seu discurs d'investidura va dir literalment “Vull fer menció especial del capítol d'espais naturals: es declararà un parc natural a la serra de Tramuntana i també s'hi declararan l'Albufereta de Pollença i es Trenc-Salobrar de Campos, tots a Mallorca”. Amb tot, passats quinze anys, això no s'ha fet realitat i ni s'ha declarat parc natural ni el Pla Especial s'ha aplicat de manera efectiva. Aquesta circumstància ha provocat el fet que, des de 1991, l'afluència incontrolada i la manca de mesures de conservació hagi donat lloc a un continu procés de degradació de la zona. L'incompliment històric de les previsions de la LEN, que assenyalava que el Govern promouria per es Trenc-Salobrar de Campos, una declaració d'espai natural protegit, s'ha de corregir.

La qualitat i importància d'aquesta zona es basa en la presència d'hàbitats de l'annex I i taxons de l'annex II de la Directiva 92/43/CE, per l'existència d'espècies i subespècies endèmiques. Atès el seu elevat interès ornitològic, aquest espai ha estat considerat com IBA (àrea d'especial importància per a les aus) per la Societat Espanyola d'Ornitologia (SEU/BirdLife) i justifica la seva declaració com a ZEPA a més de com a LIC.

Amb tot, l'indret no ha estat exempt d'amenaces i pressions urbanístiques. A les edificacions il·legals de Ses Covetes, s'afegeix el fet que l'any 2003, mitjançant la Llei d'acompanyament dels pressupostos, es modificà les DOT per permetre la construcció d'una clínica (una clínica hotel, en realitat) als banys de Sant Joan de sa Font Santa, un projecte residencial que se situaria just al costat de la zona humida d'Es Salobrar.

D'altra banda, el Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM) preveia dues operacions de reconversió territorial al municipi de Campos que van ser eliminades amb la modificació número 2 del Pla. Aquestes operacions de reconversió permetien crear al municipi (àmbit de sa Ràpita) noves zones hoteleres i residencials, cosa que hauria suposat implantar de bell nou 5.000 places turístiques i residencials molt a prop de l'àrea natural que cal protegir.

D'altra banda, i amb relació als intents més recents de declarar l'indret com a parc natural, el 9 de juny de 2006, per Acord del Consell de Govern, s'inicià el procediment d'elaboració del Pla d'Ordenació de Recursos naturals (PORN) a l'àmbit de la zona d'Es Trenc-Salobrar de Campos. El sector inclou espais que formen part del lloc d'interès comunitari (LIC) i de la zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) d'es Trenc-es Salobrar de Campos i també s'inclouen dins l'àrea marina, com a LIC, de l'arxipèlag de Cabrera, adscrits a la Xarxa Natura 2000.

Amb la iniciació del procediment d'elaboració del PORN es va anunciar la intenció d'atorgar a la zona una protecció semblant a la de S'Albufera, sense especificar quina seria la figura de protecció. L'acord del Govern parlà d'una superfície de 1.442 hectàrees terrestres (coincident, per tant, amb l'actual ANEI) i 2.338 hectàrees marines. Dos anys després, el 2008, el Govern de la CAIB va acordar una pròrroga d'un any per a l'elaboració d'aquest PORN, fet que es va tornar a repetir un any més el 2009 i s'arribà així fins al dia 9 de juny de 2010, data en què finalitzava el termini per aprovar el Pla. Cal afegir aquí que l'inici de tramitació del PORN no ha inclòs cap mesura cautelar, cosa que hauria permès protegir de manera efectiva l'indret, i hauria evitat que continués el procés de degradació mentre dura l'elaboració del PORN.

És evident que la protecció d'Es Trenc-Salobrar de Campos mitjançant la figura del parc natural, és la que ofereix les garanties de protecció i de gestió efectiva que mereix la zona. Igualment, la protecció i l'àmbit de gestió no s'ha d'ajustar necessàriament als límits de l'actual ANEI, sigui quin sigui el perímetre de la zona declarada espai natural.

Un espai natural necessita, a més, un entorn de protecció sense agressions territorials on es garanteixi una transició harmònica entre les zones de més alt valor i les perifèries.

Amb tots aquests antecedents, a la fi s'ha iniciat el tràmit per declarar mitjançant llei la declaració del parc natural “Es Trenc-Salobrar” de Campos, proposta legislativa que ha finalitzat el període de consultes i participació ciutadana (iniciat el 29 de març de 2016), i que serà una realitat en el pròxim curs parlamentari, passat l'estiu. Quan sigui una realitat analitzarem la norma amb més detall.

3. Polítiques de recursos marins

3.1. Creació de la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera

Una de les polítiques que ja gaudeix d'una tradició normativa important a l'arxipèlag és la creació de reserves marines, tant en aigües interiors, declarades pel Govern de la CAIB, com en aigües exteriors, declarades pel Govern de l'Estat. Ara és el torn de la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera promoguda pel Govern autonòmic, que regularà les extraccions de flora i fauna i les activitats subaquàtiques a aquesta zona del ponent de Mallorca. Aquesta serà la vuitena reserva marina de l'arxipèlag i comptarà amb 708 hectàrees que se sumen a les 58.000 ja existents. Així, s'ha iniciat el procediment d'elaboració d'un decret pel qual s'estableix l'esmentada reserva marina, que presenta un valor ecològic i pesquer considerable, on es poden trobar, en una àrea relativament reduïda, una diversitat molt alta d'hàbitats i comunitats, tal com recull l'estudi elaborat el 2004 pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), a proposta de la Conselleria responsable de pesca del Govern de la CAIB.

Les reserves marines són àrees on es limita l'explotació dels recursos marins vius per incrementar la repoblació d'alevins i fomentar la proliferació de les espècies marines objecte d'explotació o protegir els ecosistemes amb característiques diferenciades. Als paisatges submarins de Sa Dragonera destaquen les praderies de *Posidonia oceanica*, molt esteses cap al sud, que actuen com a zones d'elevada producció biològica i d'alevinatge d'espècies d'interès pesquer. Això fa que l'àrea mereixi un alt grau de protecció. Així mateix, la zona inclou part del lloc d'importància comunitària (LIC) de Sa Dragonera i forma part de l'entorn marí del parc natural.

Atès que diversos informes del Servei de Recursos Marins posen de manifest que les poblacions de peixos vulnerables es troben molt per davall de les que potencialment es

podrien presentar, cal regular-hi les activitats pesqueres per assegurar-ne el manteniment d'una manera compatible amb la conservació de la riquesa biològica i dels recursos marins vius. Entre d'altres mesures, es delimitaran les zones especials per al busseig recreatiu, per facilitar-ne un desenvolupament sostenible i harmònic amb la resta d'activitats.

Es compleixen així les peticions de diversos col·lectius socials i institucions públiques, com l'Ajuntament d'Andratx i el Parlament de les Illes Balears, que han demanat la declaració d'una reserva marina a l'illa i s'actua d'acord amb la consideració de *hope spot* o punt per a l'esperança de la mar Balear, declarat pel projecte Mission Blue. L'objectiu de la iniciativa és generar el suport de la societat protegir aquests indrets mitjançant la creació d'una xarxa mundial d'àrees marines protegides que salvaguardin el 20% dels oceans per a l'any 2020, ja que la mar Balear és l'únic punt amb aquesta consideració a la Mediterrània.

Des de 1999 el Govern de les Illes Balears ha establert una xarxa de reserves marines a les aigües interiors del litoral balear que ha demostrat que és una eina de gestió important per recuperar les poblacions de peixos comercials i conservar els hàbitats naturals marins. Aquest tipus de reserves s'han consolidat com un important referent per a l'activitat econòmica del busseig turístic, amb més de 25.000 immersions anuals. Per això, actualment l'arxipèlag disposa de set reserves marines, amb una superfície total de 58.000 hectàrees, que són un element bàsic de gestió pesquera del Govern de les Illes Balears.

3.2. Aprovació del Decret 22/2016, de 22 d'abril, pel qual es regulen les mesures per a la diversificació dels sectors pesquer i aquícola a les Illes Balears

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca va presentar el conegut com a “Decret Pesca-Turisme”. Ens referim al Decret 22/2016, de 22 d'abril, pel qual es regulen les mesures per a la diversificació dels sectors pesquer i aquícola a les Illes Balears, aprovat pel Govern de les Illes Balears, que intenta implantar mesures de diversificació de l'activitat pesquera afegint possibles vies de complement de rendes. Amb aquesta mesura, es preveu que els pescadors obtinguin ingressos addicionals, embarcant turistes a bord mentre duen a terme l'activitat pesquera, cosa que, segons s'affirma en l'exposició de motius, resulta totalment compatible i que no perjudica la

seva feina diària. Aquesta nova font d'ingressos millorarà les condicions de vida laboral de la gent de la mar, tant reduint les hores de pesca com també evitant posar la seva vida en risc quan surten a fer feina amb mal temps per assegurar-se un salari mínim, que ara es podrà compensar mitjançant el turisme.

La millora de les condicions de feina i la creació de noves possibilitats de negoci obre la porta a la incorporació dels més joves a un sector molt envellit i sense relleu generacional a dia d'avui. En part, el desplaçament parcial de l'activitat marinera al turisme ajudarà a reduir l'impacte sobre els recursos pesquers, ja que s'escurça el temps dedicat a pesca, cosa que permetrà recuperar les pesquerdes, i es col·laborarà així amb l'equilibri mediambiental.

D'altra banda, la venda directa de les captures als turistes que participin a l'activitat, sempre en el marc de la legislació vigent, serà una font d'ingressos extra. Aquesta activitat no suposa només ingressos econòmics derivats de la venda de l'excursió, ja que també pot originar beneficis tals com que els turistes puguin menjar el peix fresc, o, fins i tot, el menjar típic mariner, a bord dels vaixells, cosa que suposa una manera de difondre la gastronomia. Igualment, s'espera que amb les previsions relatives a la promoció del peix balear des del punt de vista turístic, s'aporti un valor afegit als productes frescos de la mar, cosa que, amb el temps, podria generar una marca pròpia i així obtenir un millor preu de venta del peix.

La motivació del decret considera que aquesta nova disposició normativa reguladora de les mesures per a la diversificació dels sectors pesquer i aquícola a les Illes Balears, no només pretén posar en relleu l'excepcional paisatge de les nostres costes sinó que també promocionarà una cultura marinera i una gastronomia que corre perill de desaparèixer a més de proporcionar a les confraries de pescadors, que són corporacions de dret públic i sense ànim lucratiu, uns ingressos suplementaris que els permetin atendre les activitats socials que duen a terme, especialment les dirigides a mariners jubilats i als seus familiars. Es busca, doncs, una simbiosi entre cultura, economia i medi ambient.

3.3. Coordinació de les polítiques de pesca entre Eivissa i Formentera

El consells d'Eivissa i de Formentera han acordat posar en comú les respectives polítiques pesqueres i, alhora, demanar al Govern balear més mitjans per a la gestió efectiva de les reserves marines amb una millora de la dotació de personal i de material.

Les administracions insulars esmentades han valorat diverses propostes d'acció conjunta sobre l'espai marí que comparteixen les illes esmentades, i han posat en comú les polítiques en matèria de pesca que s'estan duent a terme tant des d'Eivissa com des de Formentera. Totes dues institucions també sol·licitaran al Govern Balear el canvi d'alguns aspectes de la normativa pesquera per adequar-la a la realitat del sector, i han posat com exemple el caràcter poc dissuasiu que tenen les multes per pesca il·legal amb fins comercials, per la seva poca quantia. També s'ha acordat pressionar conjuntament per aconseguir més vigilància a les reserves marines.

En la mateixa línia, els consells d'Eivissa i de Formentera també han acordat reclamar que tots aquells projectes que puguin afectar els recursos pesquers —com la construcció de ports esportius, la instal·lació d'emissaris o de cables submarins— tinguin també un informe valoratiu de les respectives conselleries insulars de Pesca.

Finalment, cal assenyalar que ambdós consells insulars han constatat el descens registrat de captures pesqueres, i han valorat l'adopció de mesures i anàlisis sobre on establir nous espais protegits que no suposin un desplaçament de la pressió pesquera a zones adjacents.

4. Polítiques energètiques

4.1. Eliminació de la taxa d'autoconsum a les renovables i altres mesures

En el marc d'una revisió profunda de les polítiques energètiques a l'arxipèlag, el Govern ha promogut diferents accions per impulsar l'estalvi energètic i fomentar l'ús de les energies renovables. Una de les primeres mesures adoptades ha estat eliminar la taxa administrativa per a les instal·lacions d'autoconsum energètic per a llars i petits comerços. Així, el Govern de les Illes Balears ha eliminat la taxa administrativa de fins a quasi 70 euros que fins ara s'havia de pagar per la posada en servei de les instal·lacions de generació elèctrica renovable per a autoconsum de fins a 10 kW. Aquesta potència és la que habitualment sol tenir una llar particular o fins i tot un petit comerç, que també es podran beneficiar de l'exemció.

Igualment, i també per afavorir les instal·lacions d'autoconsum per al 2016, s'ha augmentat la deducció fiscal per inversions que millorin la qualitat i la sostenibilitat de l'habitatge habitual fins al 15% de la inversió feta. A més a més, s'està preparant la posada en marxa d'una finestreta única que permeti simplificar els tràmits.

En la mateixa línia, i d'una forma coordinada, tant l'Administració de la CAIB com algunes institucions insulars, han adquirit vehicles elèctrics i han instal·lat un punt de recàrrega gratuïta per a aquesta mena de mitjans de transport. La intenció del Govern és que, progressivament, a mesura que es vagi renovant la flota de cotxes, es vagin introduint vehicles que funcionin amb energia neta. Aquesta acció s'emmarca en una estratègia global del Govern per impulsar l'estalvi energètic i la utilització de les energies renovables. Les actuacions en què es materialitzarà aquesta estratègia, coordinades per la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, es fonamenten en tres eixos: l'estalvi energètic, l'avenç en l'electrificació del transport en una clara apostava per la mobilitat elèctrica, la generació d'energia renovable i l'autoconsum, tant en les instal·lacions de la mateixa CAIB com entre els ciutadans.

Igualment, existeix la intenció d'implantar altres mesures per beneficiar econòmicament els ciutadans que optin per instal·lar sistemes d'autoconsum energètic a la seva llar o en petits comerços, sota el principi que tot allò que redueixi la dependència dels combustibles fòssils i contribueixi a lluitar contra el canvi climàtic, trobarà un lloc en les noves polítiques energètiques d'aquesta legislatura.

Finalment, cal assenyalar que s'està donant un impuls a la implantació de nous projectes de parcs fotovoltaics, tot i que sobre aquesta qüestió es planteja el conflicte de la correcta implantació i integració al paisatge illenc, especialment sensible i vulnerable, en funció de l'impacte que presenten les iniciatives que es volen implantar en zones agrícoles de valor i amb una extensió on l'impacte visual és significatiu.

4.2. Altres mesures per potenciar les energies netes i d'impuls al vehicle elèctric

A les mesures apuntades en l'apartat anterior cal afegir-hi altres accions per fomentar l'estalvi energètic i l'ús de renovables. D'una banda, durant el 2016, es durà a terme una diagnosi energètica de les instal·lacions de totes les conselleries del Govern per tal de determinar el potencial màxim d'estalvi energètic. Aquesta diagnosi ajudarà a estructurar el pla d'estalvi que s'activarà. Igualment, d'altra banda, en el primer semestre del 2016, es traurà a concurs un nou contracte de subministrament energètic a la CAIB, subministrat per aquesta que haurà de ser exclusivament amb energies renovables. La idea és que quan es resolgui el concurs, les instal·lacions dependents de la CAIB podran

funcionar amb energies netes. L'estalvi que s'espera aconseguir tant amb el pla d'estalvi com amb el nou contracte de subministrament i amb la progressiva instal·lació de sistemes d'autoconsum es reinvertirà en mesures com el fons de rescat energètic que es va anunciar recentment a la Mesa de Lluita contra la Pobresa Energètica i que, inicialment, estarà dotat amb 200.000 euros.

Altres actuacions d'estalvi energètic van dirigides a adoptar un model de mobilitat sostenible, amb la potenciació d'un servei de transport públic de qualitat i la utilització d'energies netes perquè funcioni —com es pretén amb l'electrificació de tota la xarxa de tren—. Per avançar cap a un model de transport més sostenible, cal reduir també la dependència del cotxe i afavorir l'ús de vehicles elèctrics. Així, paral·lelament, s'impulsarà l'ús del vehicle elèctric amb tot un conjunt de mesures; de fet, en pocs mesos s'han triplicat els punts de recàrrega a les Illes, que han passat de 45 a prop de 150, i alhora es treballa en la creació d'una xarxa única de recàrrega.

D'altra banda, el Govern ha reservat un total de 800.000 euros en ajudes a les institucions públiques. D'aquests diners, 500.000 euros seran per subvencionar la instal·lació de plaques solars als terrats dels edificis públics, i 300.000 euros seran per als municipis que instal·lin punts de recàrrega per vehicles elèctrics.

Pel que fa a les plaques solars, el Govern subvencionarà fins a un 80% de la instal·lació. Respecte als punts de càrrega per a vehicles elèctrics, la subvenció del Govern serà d'un 100% amb un màxim de cinc punts de càrrega per municipi. En aquest cas, per concedir l'ajuda, el Govern valorarà que l'Ajuntament hagi incorporat a les ordenances mesures efectives per afavorir el vehicle elèctric, com la gratuïtat d'aquests vehicles a les zones blaves, els descomptes en l'ús aparcaments soterrats municipals, o el descompte en els tributs municipals de circulació.

5. Altres polítiques ambientals

5.1. Aprovació d'un pla de sequera

Davant l'escassa pluviometria en els darrers mesos, les Illes Balears es troben en estat d'alerta per manca del recurs. Amb la finalitat de minimitzar l'impacte d'aquesta reducció dràstica de les reserves d'aigua, s'ha acordat elaborar un pla de sequera. Un instrument legal necessari amb el qual actualment no es compta perquè no es va incloure en el Pla Hidrològic aprovat en l'anterior legislatura. Per això es posaran en

marxa, de manera immediata, accions concretes per incrementar el recurs de l'aigua, bàsicament amb les dessaladores. A la de Palma, s'incrementaran les línies producció, la d'Andratx es connectarà a través de les xarxes municipals i a la d'Alcúdia se la dotarà de més potència. Mentre a Eivissa es duran a terme un seguit d'accions per connectar la dessaladora de Santa Eulària, que el Govern rebrà d'aquí a unes quantes setmanes.

Aquestes accions, es complementaran amb la gestió de la demanda mitjançant campanyes de conscienciació ciutadana sobre la realitat de les reserves d'aigua a l'arxipèlag com a bé escàs. En aquest sentit es donarà suport als ajuntaments perquè redactin ordenances en cas d'haver-hi restriccions per prioritzar els usos admesos. En la mateixa línia, es dotaran els nuclis de poblacions amb més de 20.000 habitants perquè elaborin un pla d'emergència davant la sequera.

El Govern va difondre el missatge que calia fer un esforç mental de canvi de paradigma i situar les dessaladores com a base del sistema per complementar-lo amb els recursos naturals que hem estalviat durant l'estiu, i no al revés com s'ha fet fins ara, tenint en compte que Mallorca es troba en prealerta per sequera, i Eivissa ja ho està.

5.2. Revisió de la política de carreteres a Menorca

El Servei de Carreteres del Consell Insular de Menorca ha conclòs la revisió del projecte de millora de la Me-1 del tram Ferreries-Ciutadella. Amb aquesta revisió s'han incorporat les propostes que es van presentar al públic a principis del passat mes de març a Ferreries i a Ciutadella. Amb aquesta iniciativa es completa la revisió de l'anterior projecte de reforma de la carretera general, que va generar un enorme rebuig social per haver-se considerat desproporcionat i irracional.

La revisió d'aquest projecte en concret incorpora la reducció d'una sèrie de trams, d'enllaços, de rotundes i de passos desdoblats, amb una millor redistribució dels carrils i la minimització de l'impacte i les ocupacions sobre els terrenys afectats.

El pressupost del projecte revisat és de 9.250.000 euros. Així, s'ha reduït el pressupost d'obra del projecte original en 750.000 euros per incloure dins els 10 milions destinats a aquest tram les assistències tècniques de redacció de projectes i de direcció de les obres. D'altra banda, com s'ha dit, la revisió del projecte ha permès reduir l'ocupació del territori en 37.500 m² respecte del projecte constructiu aprovat per l'anterior equip de govern, la qual cosa representa un 23%.

5.3. Política de residus i depuració d'aigües a Eivissa

El Ple del Consell ha acordat l'aprovació inicial del projecte per construir una planta de triatge per tractar els llops de les depuradores, amb la modificació inicial del contracte entre el Consell i l'UTE GIREF sobre el funcionament i l'explotació d'instal·lacions de tractament integral de residus. Aquesta modificació comporta la construcció, per part de l'UTE GIREF, d'una planta de triatge a l'abocador de Ca na Putxa. Aquesta planta separarà els fems que no hagin estat destriats prèviament i incorporarà dues línies de compostatge. Una d'aquestes línies de compostatge tractarà els llops provinents de les depuradores.

Una vegada votada l'aprovació inicial, s'obre un període d'al·legacions i, en un termini màxim de tres mesos, el Ple del Consell ha de votar l'aprovació definitiva. Es preveu que les obres s'iniciïn a finals d'any.

5.4. Aprovació d'una norma territorial cautelar a Mallorca sobre equipaments comercials

Després d'una tramitació en què van tenir lloc diferents trobades amb representants del sector del comerç, d'entitats de defensa dels consumidors, dels sindicats, del Govern de les Illes Balears i de l'Ajuntament de Palma, es va aprovar la versió definitiva de la Norma territorial cautelar (NTC), per continuar treballant en l'inici de la redacció del Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials. L'NTC, principalment, suspèn la implantació i ampliació de grans establiments i la restringeix a una sèrie de casos taxats.

Després d'haver passat el període d'al·legacions, es van incorporar algunes modificacions per millorar-la. En general, se n'ha simplificat el contingut perquè sigui més senzilla. En aquest sentit, només es tracten els casos de sòl urbà, ja que, actualment, només és possible construir equipaments comercials en aquesta mena de sòl.

Durant el procés es van analitzar una vintena d'al·legacions i es va intentar respondre a tothom. Sobretot, es van atendre les que provenien del món del comerç per poder millorar la redacció de la norma. Les dimensions dels espais que es consideraven gran equipament comercial no han variat. Per tant, els gran establiments comercials continuen sent aquells que tinguin una superfície útil per a l'exposició i la venda

superior a 700 metres quadrats. Algunes excepcions, com ara establiments de material de construcció o d'automòbils, poden arribar als 2.000 metres quadrats.

No obstant això, s'han exclòs de la suspensió la implantació i l'ampliació d'establiments comercials individuals ubicats en grans centres comercials col·lectius, sempre que no s'incrementi la superfície edificada ni envaeixin espais comuns. D'altra banda, també se n'exclou l'ampliació de grans establiments comercials individuals fins a un màxim del 15% o de 200 m². Però, no pot suposar que se n'ampliï l'edificabilitat ni tampoc un canvi d'activitat.

La Norma territorial cautelar fou aprovada definitivament al Ple del Consell de Mallorca de dia 11 de febrer del 2016. Va entrar en vigor ho a partir de la publicació al BOIB número 28 de dia 1 de març de 2016 (pàg. de 5760 a 5763)⁸.

L'aprovació i entrada en vigor de la norma s'ha dut a terme motivada en raons imperioses d'interès general (RIIG), de conformitat amb el marc de la legislació de liberalització del mercat interior i sobre la base de les competències exclusives de les comunitats autònomes pel que fa a ordenació del territori. Això no obstant, una patronal del sector va interposar la reclamació prevista en l'article 26 de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat (LGUM), i a hores d'ara la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ja ha presentat davant la institució insular el corresponent requeriment previ de l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (LJCA), la qual cosa implicarà, amb tota seguretat, que la norma acabi sent discussió davant els tribunals.

⁸ Vegeu: <<http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10456/576976/acord-del-ple-del-consell-insular-de-mallorca-d-ap>>.